

Julio 20 de 1939

23ª REUNION — 21ª SESION ORDINARIA

Presidencia de los señores Juan G. Kaiser y Carlos A. Pita

MINISTRO PRESENTE:

de Agricultura,
Ingeniero José Padilla;

DIPUTADOS PRESENTES:

Aguar, Henoch D.
Aguirre Cámara, José
Agulla, Juan Carlos
Alcina, Juan José
Alvarez Colodrero, Carlos
Allperin, Samuel
Amadeo y Videla, Daniel (h.)
Anastasi, Leonidas
Araujo, Eduardo
Arbeletche, Anibal P.
Astesiano, Carmelo I.
Barrau, José
Beiró, Angel Francisco
Bertotto, José G.
Boatti, Ernesto C.
Busaniche, Julio A.
Busignani, Mario
Cabral, Humberto
Cafferata, Fuar F.
Cantillo, José Luis
Cappellini, Luis E.
Carreras, Ernesto L. de las
Castex, I. Mario
Castro Frediani, Manuel L.
Cisneros, Carlos E.
Cooke, Juan I.
Cordero, Octavio
Courel, Carlos D.
De Miguel, Benito
Devoto Acosta, Alcibíades
Díaz, Raúl
Dickmann, Enrique
Duffy, Eduardo N.
Eberlé, Enrique
Eyto, Francisco F.
Fassi, Santiago Carlos
Fazio Rojas, Lorenzo

Figuerola, Julio A.
Garona, Juan A.
Ghioldi, Americo
Godoy, Raúl
Gómez Grandoli, Clemente
Gómez Rincón, Abel
González, Benjamin S.
Grisolia, Luis
Güerci, José María
Guerrero, José Rafael
Guglielmelli, Aquiles M.
Guillot, Victor Juan
Güiraldes, Carlos (h.)
Gutiérrez, José María
Hardoy, Emilio J.
Hernández, Clodomiro
Horne, Bernardino
Illanes, Eloy J.
Infante, Faustino
Irigoyen, Carlos
Iriondo, Urbano de
Jaramillo, José María
Jiménez, Mario
Kaiser, Juan G.
Lanús, Adolfo
Lima, Vicente Solano
López, Héctor S.
López García, Francisco
López Merino, Ismael
Maino, Alejandro
Martínez, Benito E.
Medina, Justo G.
Méndez Calzada, Joaquín
Montagna, Carlos P.
Moreno, Ricardo A.
Mugica, Adolfo
Muniagurria, Walter Julio
Noel, Martín
O'Reilly, Guillermo R.
Ortiz Basualdo, Samuel
Ortiz de Zárate, Miguel
Osore Soler, Manuel E.
Pagano, David J.
Palacio, Benjamin

Pastor, Reynaldo A.
Paz, Eduardo
Paz Posse, Ramón D.
Peco, José
Peña, Ernesto S.
Peña, Solano
Pérez, Deolindo
Piedrabuena, Carmelo P.
Pinto, Manuel (h.)
Pita, Carlos A.
Prat Gay, Fernando de
Radio, Pedro
Ravignani, Emilio
Repetto, Nicolás
Reyna, Rodolfo
Rocha, Justo V.
Ruggieri, Silvio L.
Saá, Alberto
Saccione, Romeo D.
Sancerni Giménez, Julián
Sánchez, Adolfo B.
Schoo Lastra, Dionisio
Siri, Obdulio F.
Solá, Juan E.
Solana, J. Félix
Solari, Felipe C.
Solari, Juan Antonio
Solís, Rogelio J.
Soto, Pedro Numa
Susan, José C.
Tamborini, José P.
Tapia, Numa
Vásquez, Juan Carlos
Vélez, Francisco M.
Videla Dorna, Daniel
Vilchez, Martín
Zara, Edmundo Leopoldo
Zavala Ortiz, Teobaldo

Ferreira, Antenor R.
Grassi, Alfredo
Hernández, Victorio
Izurieta Fourquet, Agustín
Labayen, Juan
Lazo, Plácido C.
Martínez, F. Benigno
Martínez, Gregorio N.
Martínez, Manuel
Noel, Carlos M.
Onsari, Fabián
Osorio, Miguel
Quintana, Fenelón
Sáenz, Mario
Telsaire, Eduardo (h.)
Urien, Enrique César
Vilgré La Madrid, Juan
Zunino, Marcelo A.

AUSENTE, CON AVISO:

Damonte Taborda, Raúl

AUSENTES, SIN AVISO:

Arias Uriburu, Juan
Barceló, Alberto
Barrionuevo, Gerardo
Boero, Albino
Carás, Agustín J.
Morrogh Bernard, Juan F.
Sammartino, Ernesto
Simón Padrós, J.
Soldano, Arquímedes A. E.

AUSENTES, EN COMISION:

Acuña, Aurelio S.
Lezica Alvear, Florencio
Pandolfo, Pío
Pizarro, Néstor A.

AUSENTES, CON LICENCIA:

Basualdo, Honorio
Beristain, Francisco
Biancofiore, Rafael

SUMARIO

- 1.—Manifestaciones en minoría.
- 2.—Acta.
- 3.—Asuntos entrados:

I.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, sobre presupuesto general de gas

tos y cálculo de recursos para el año 1940.

- II.—Comunicación oficial.
- III.—Despachos de comisión.
- IV.—Peticiones particulares.
- V.—Proyecto de ley, de los señores diputados Courel e Illanes, sobre construcción de un edificio con destino a oficinas de

Correos y Telégrafos, en Deán Funes (Córdoba).

VI.—**Proyecto de ley**, del señor diputado **Méndez Calzada**, sobre salarios básicos y creación de la junta de regulación de salarios, de jurisdicción en todo el país.

VII.—**Proyecto de ley**, de los señores diputados **Boatti y Noel (M.)**, sobre construcción de un pabellón en el hospital Durand, destinado a los servicios de niños, ortopedia y traumatología y neurología.

VIII.—**Proyecto de ley**, del señor diputado **De Miguel** y otros, sobre inclusión en los beneficios de la ley número 11.110, al personal técnico, de administración y enfermeros de los hospitales particulares.

IX.—**Proyecto de ley**, del señor diputado **Paz** y otros, sobre pensión a las señoritas **Julia, Lilia y Raquel Mena Lacavera**.

4.—Acuérdase licencia para faltar a sesiones, a los señores diputados **Izurieta Fourquet Teisaire (h.)**,

Grassi, Lazo y Labayen.

5.—Se considera el despacho de la **Comisión de Negocios Extranjeros y Culto**, sobre elevación al rango de embajada de la representación argentina en Colombia. Es aprobado.

6.—Se aprueba una moción del señor diputado **Rocha**, sobre envío de un mensaje a la **Cámara de Diputados de Colombia**.

7.—Continúa la consideración del despacho de la **Comisión de Legislación Agraria**, sobre creación del consejo agrario nacional.

—En Buenos Aires, a veinte días del mes de julio del año 1939, siendo la hora 15 y 59.

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Iriondo. — Pido la palabra.

Como según tengo entendido, aún no hay número, hago indicación de que se continúe llamando un cuarto de hora más para evitar que se malogre la sesión.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Kaiser). — Habiendo asentimiento, se continuará llamando hasta las 16 y 15.

2

ACTA

—A la hora 16 y 10:

Sr. Presidente (Kaiser). — Queda abierta la sesión con asistencia de 81 señores diputados en el recinto.

Se va a dar lectura del acta de la sesión anterior.

—Por indicación del señor diputado Sánchez, se suprime la lectura, y se da por aprobada el acta.

3

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

I

Mensaje

Buenos Aires, julio 20 de 1939.

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de someter a la consideración de vuestra honorabilidad, el proyecto de presupuesto general de gastos de la administración y de las reparticiones autárquicas, para el año 1940.

El proyecto que acompaña contiene reformas que, de merecer la aprobación del Honorable Congreso, permitirán que el presupuesto general comprenda virtualmente, la totalidad de gastos, dando a dicha ley mayor sencillez y claridad. Con ellas se cumplirá una nueva etapa de la obra iniciada en los últimos años en estrecha colaboración con vuestra honorabilidad. Dichas reformas responden, en ciertos aspectos, a planes enunciados anteriormente por el Poder Ejecutivo y coinciden en otros puntos con anhelos expresados en el Congreso en favor de un ordenamiento tendiente a lograr el principio de la universalidad de los gastos y recursos.

Las variaciones que se han introducido en la estructura del presupuesto general, en los últimos años, respondieron principalmente, a la necesidad de extirpar los factores constitutivos de déficit ocultos. Tal ha sido el propósito que inspiró la incorporación de los gastos y recursos del Consejo Nacional de Educación, del Fondo de Asistencia Social, del déficit de Obras Sanitarias y de ciertos gastos que se acostumbraban realizar al margen del presupuesto, en años anteriores.

Con la sanción de la ley especial número 12.576, que excluye del presupuesto general a los créditos destinados a la realización de los trabajos públicos, se inició el año próximo pasado otra tarea interesante, tendiente a mejorar la técnica del presupuesto. El propósito perseguido en este caso ha sido el de limitar el contenido del presupuesto a los créditos para gastos ordinarios de la administración, que tienen caducidad anual, y tratar

res hechas en la Cámara por los señores diputados López Merino y Guillot, ante el requerimiento del señor diputado Saccone, de tratar sobre tablas este despacho. Dijeron los señores diputados que, como un homenaje a Colombia, consideraban oportuno tratarlo el día del aniversario de su independencia.

Sobre asuntos de esta naturaleza ha habido en el Parlamento debates de gran fuste, y se ha impuesto el concepto de que respecto a ellos se cancelan las reservas y se vota. Con esta reflexión, que me parece oportuna, voy a dar los datos que desea el señor diputado.

Las exportaciones de la Argentina a Colombia, desde los años 1933 a 1938, han sido las siguientes en moneda colombiana: en 1933, 71.254 pesos; en 1934, 77.182; en 1935, 79.131; en 1936, 116.330; en 1937, 199.519; y en 1938, 362.462. Vale decir, que en todo ese lapso ha habido una exportación de la Argentina a Colombia, de 906.478 pesos colombianos.

Estos son los datos de nuestra exportación a ese país.

Sr. Ghioldi. — Muchas gracias, señor diputado.

Sr. Saccone. — Pido la palabra.

Como pudiera desprenderse de la pregunta del señor diputado socialista el concepto de que sólo se puede elevar a la categoría de embajada las representaciones ante los países que comercian mucho con el nuestro, me permito recordar el verdadero antecedente de esta cuestión.

Colombia ha elevado a embajada su representación diplomática en Buenos Aires, y es de reciprocidad obligada, y en este caso sinceramente sentida, que nosotros correspondamos con igual gentileza.

Respecto a la parte mercantil, me atrevo a expresar lo siguiente: sería oportuna la pregunta del señor diputado si se tratara de aumentar nuestra representación consular, que es precisamente la que tiene a su cargo la parte comercial; pero en materia de embajadas, es muy común que un país envíe representaciones de esa naturaleza a naciones con las cuales no comercia.

Hay aquí una finalidad panamericanista. Tradiciones históricas comunes, razones de un orden más elevado que los derivados del orden mercantil. No sólo de pan vive el hombre, y lo mismo puede decirse de las naciones. Estamos respondiendo a un concepto de solidaridad panamericanista, superior a los intereses del

comercio internacional. Ese debe ser el fundamento de nuestro voto, que entiendo debería ser unánime.

Nada más. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar en general.

— Resulta afirmativa.

— Igualmente, se aprueba en particular.

Sr. Presidente (Kaiser). — Queda sancionado. Se comunicará al Honorable Senado.

6

MOCION

Sr. Presidente (Kaiser). — Está en consideración de la Honorable Cámara la indicación formulada por el señor diputado por Buenos Aires, autorizando a la Presidencia a enviar un mensaje a la Cámara colombiana.

Sr. Guglielmelli. — ¿Haciéndole conocer la creación de la embajada?

Sr. Presidente (Kaiser). — Eso no será posible, porque todavía no es ley.

Sr. Guglielmelli. — Pero por lo menos la sanción de esta Cámara.

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar la indicación formulada.

— Resulta afirmativa.

7

COLONIZACION NACIONAL

Sr. Presidente (Kaiser). — Continúa la discusión de la orden del día número 73, sobre creación del consejo nacional agrario.

Había quedado con la palabra el señor diputado por la Capital, que solicitó una prórroga del plazo reglamentario, que se va a votar.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Kaiser). — Continúa con la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Guillot. — Agradezco a la Honorable Cámara la deferencia que acaba de tener y trataré de corresponder a ella abreviando mi exposición.

Desde luego, la situación de un diputado cuyo discurso cabalga sobre dos sesiones es un poco difícil. No resulta del todo hacedero concetar lo dicho anteriormente con lo que ha de seguir sin hacer un ajuste que establezca una vinculación entre una y otra parte. Por eso, violentando hábitos parlamentarios que cultivo, he preferido escribir algunas páginas que deseo que la Honorable Cámara me permita leer, las que servirán de nexo entre lo dicho y lo que diré para terminar mi exposición.

Decía ayer, señor presidente, que no era la prosperidad agrícola de los Estados Unidos la causa del decrecimiento del número de propietarios y del aumento del número de arrendatarios. Con el concurso de opiniones autorizadas y estadísticas recientes insistía en que este fenómeno era el resultado de causas opuestas. Era la crisis agrícola la que modificaba la su- hasta de pequeñas propiedades multiplicando el número de arrendatarios. Y ello es tan exacto que se sancionó en los Estados Unidos en el año 1933 la ley de ajustes agrícolas, como un elemento integrante de la grandiosa y, puede decirse, arriesgada experiencia del *New Deal* con su costosísimo sistema de asignaciones domésticas encaminadas a devolver a los productores agrarios lo que allí se llama su justo valor de cambio. Todo ello demuestra que este verdaderamente dramático problema agrario, que afecta a más de trece millones de personas, está lejos de encontrarse en vías de solución.

El señor diputado por Santa Fe, cuando se refería a esta misma ley, recordaba una inversión de 1.000.000.000 de dólares en el cumplimiento de sus fines. Sin rectificar ni ratificar esa cifra, quiero recordar que solamente para aplicar la ley con respecto a la industria del algodón se firmaron un millón de contratos en el primer año y se invirtieron 100.000.000 de dólares, arrasándose diez millones de acres sembrados. En otro orden se sacrificaron seis millones de lechones y se adquirieron treinta millones de kilos de manteca en el desarrollo inicial del cumplimiento de esa ley, que no terminó todavía. Un detalle interesantísimo de la intensidad que adquirió la crisis y de la celeridad con que hubo de procederse, lo constituye el hecho de que en los primeros meses del cumplimiento de la ley se firmaban 80.000 cheques diarios para satisfacer las indemnizaciones exigidas por el sistema de cuotas domésticas.

Es exacto, pues, que en los Estados Unidos existe una formidable crisis agraria, cuyas

consecuencias están afectando profundamente hasta el régimen de la propiedad rural en ese país. La enajenación de las granjas, que pasa generalmente a poder de sociedades anónimas, está operando un proceso de reconcentración del suelo en detrimento de un sistema tradicional de explotación del suelo. En ese sentido me parece altamente previsora la cláusula del artículo 16 del proyecto en discusión. Y me place reconocer que esa cláusula está originada en el artículo 4º del anteproyecto del señor diputado Horne, que ha contribuido con excelentes sugerencias a la redacción final de la ley que discutimos.

Lo expuesto precedentemente no tiene el propósito de refutar afirmaciones hechas, sino que conduce a este designio: probar, si ello fuera menester, con experiencias de otros países que resolvieron a su tiempo el problema de la partición y distribución de la tierra, que la conversión de arrendatarios en propietarios o la distribución de algunas tierras entre colonos foráneos, no contiene la integral solución del vasto y complejo problema del agro argentino. A lo sumo será un primer paso en ese sentido; y por ser el primero conviene que sea el más seguro.

Suponer que esta ley, que tiende valientemente, lo reconozco, a formar una retaguardia de campesinos independientes a la población urbana del país, nos permitirá desentendernos de la cuestión de los arrendatarios, importaría un grave error ocasionando desagradables sorpresas y dolorosas consecuencias, en lo que coincide con el señor diputado por la Capital, doctor Repetto.

Como se puede advertir, mi exposición, que tomó la última parte de la sesión anterior, inicia la serie de pequeños discursos que suscita ineludiblemente la consideración de una ley de importancia. Puesto en esa disposición de crítica de tono menor me proponía, en concreto, exponer algunas dudas sobre la probabilidad de que este despacho, ya convertido en ley, llene todos los fines expuestos en su artículo 1º y ejecute los propósitos enunciados por sus mantenedores. Esas dudas las podría explicar en el siguiente cuestionario que ensayaré desarrollar en la medida que lo consienta el tiempo de que dispongo. El cuestionario lo hago en una serie de proposiciones interrogativas porque expresan mejor la perplejidad que me embarga frente a ciertas disposiciones de la ley y ante la orientación general de su estructura.

¿Es esta ley más que una ley de coloniza-

ción interior? ¿Su ejecución responderá al designio de poblar el territorio, restableciendo el perdido equilibrio entre la población rural y la urbana y ensanchando la capacidad de consumo del mercado interno por el doble recurso de acrecentar la población rural y elevar los niveles de su poder de compra? Aun cuando encuadrada en los límites de un plan de colonización interna, ¿la ejecución de la ley es factible en las circunstancias actuales frente a factores económicos que le obstaculizan como ser el empobrecimiento de los agricultores, el costo de la tierra y la caída de los precios? ¿El plan desarrollado en la ley ofrece a los agricultores argentinos incentivos suficientes para atraerlos y provocar su adhesión? En caso afirmativo, ¿la base financiera de la ley ha sido calculada sobre índices reales, de modo que los recursos correspondan a las exigencias y establecida sobre un sistema de aportes lo bastante sólido como para que no fracase cuando el plan haya sido lanzado y se encuentre en plena ejecución? ¿Las disposiciones de la ley contemplan el problema demográfico de la natalidad y ensayan resolverlo por procedimientos de aplicación paralela y conexa con el desarrollo de la colonización? Y ya que se trata de una ley normativa destinada a operar durante largos años, ¿no resulta inconveniente restringir sus previsiones relacionadas con la colonización por inmigración?

Serían estos puntos los que hubiera intentado desarrollar para provocar los esclarecimientos del señor ministro de Agricultura, del señor miembro informante de la comisión y de los señores diputados que han intervenido en el debate sosteniendo el despacho. Evidentemente no dispondré del tiempo necesario para hacerlo, de manera que ensayaré, repito, desarrollar aquellos puntos que me consientan los minutos de que dispongo. Por otra parte, me felicito de que esta tarea me haya sido aliviada por exposiciones anteriores: el interesantísimo discurso del señor diputado por la Capital, doctor Fassi, la metódica y bien documentada exposición del señor diputado Pinto y algunas de las sagaces observaciones contenidas en la intervención del señor diputado por Santa Fe, doctor Infante.

Primera cuestión: ¿Es ésta una ley que poblará el agro argentino? A mi juicio, no. Si el 75 por ciento de las tierras dedicadas a colonizar se destinan a agricultores que actualmente cultivan el territorio argentino y sólo se concede un 25 por ciento subsidiario a una

probable inmigración extranjera, esto, a mi juicio, define ya el carácter de la ley: una ley de colonización interna. En este sentido una vez más coincide con el señor diputado Repetto cuando afirmaba que tratándose de leyes de colonización no hay por qué insistir siempre que esa colonización haya de hacerse con elementos inmigrados; y, naturalmente, disiente con el señor miembro informante el despacho, a mi juicio, quien afirmaba con la cita de Sarmiento que la población de la República Argentina debe hacerse de gajo, es decir, por inmigración.

Sr. Palacio. — Es de Alberdi la cita.

Sr. Guillot. — Bien; de Alberdi. Las citas de Alberdi encierran un peligro. Alberdi ha sido algo contradictorio; ha hecho afirmaciones que ninguno de los diputados actuales seríamos capaces de suscribir. Y no me refiero a ésta, porque soy partidario de la inmigración, como lo es todo mi partido. Como lo ha sido siempre.

Decía, señor presidente, que es una ley de colonización interna. Cuando entre a funcionar el mecanismo de esta ley habrá de operarse una traslación de los agricultores actuales dentro del territorio de la República, habrán de moverse de una comarca a otra, abandonarán sus situaciones actuales, el medio que conocen, en que se desenvuelven y operan. Esto en el supuesto lógico de que las operaciones preliminares de la colonización se hagan, no con tierras expropiadas y entregadas a la explotación privada, sino con las tierras a que se refiere la ley, pertenecientes al Banco Hipotecario Nacional, al Banco de la Nación, y al Instituto Movilizador.

Se observará que algunas de esas tierras estarán cultivadas y en posesión de arrendatarios y que, por consiguiente, se operará una transferencia de arrendatario a propietario dentro de los mismos predios. Parcialmente, sí; en general, no ocurrirá eso. De manera, entonces, que los agricultores se verán obligados a optar entre la tierra que cultivan, con mejoras realizadas que le serán pagadas sólo parcialmente, de acuerdo con la ley de arrendamientos agrícolas, y las tierras nuevas que se les brindan. ¿Los incentivos que ofrece la ley a los agricultores son suficientes para justificar ese movimiento dentro del territorio nacional, ese cambio de hábitos, esa sujeción a condiciones económicas y legales nuevas? Yo no podría responder afirmativamente.

Examinando la ley, veo que los futuros propietarios tendrán obligaciones económicas de

esta naturaleza: pago al contado del 10 por ciento del precio; un 3 por ciento anual correspondiente a $1\frac{1}{2}$ por ciento de amortización y $2\frac{1}{2}$ por ciento de intereses, en la primera época, y un 5 por ciento y un 1 por ciento, después, cuando se sujeten a las condiciones del Banco Hipotecario Nacional 1 a 4 por ciento anual sobre el precio para el fondo de ahorro; 6 por ciento de interés sobre las deudas atrasadas, en el caso muy posible de que las contraigan; y amortización e intereses de la deuda del artículo 60, que será un préstamo para instalación. Esto significa un desembolso anual crecido. Se puede objetar que siempre el desembolso sería menor que el monto total de los cánones por arrendamiento que pagan en la actualidad. Exacto: pero la primera exigencia de la capacidad económica plantea el primero y grave de los problemas contenidos en el despacho.

Leía el otro día una correspondencia firmada por persona autorizada que se preocupaba por esta clase de asuntos, en que insistía sobre la situación angustiosa de los arrendatarios argentinos, y esa cita coincidía con una afirmación del señor diputado Repetto, que conoce tan bien los problemas agrarios argentinos y la situación de la clase arrendataria, quien decía que se asiste en estos momentos al derrumbe de la clase conocida con el nombre de arrendatarios, clase que preferiría ser reducida a la condición de peón porque en su mayoría se hallaría en condiciones más favorables si le fuera dado encontrar alojamiento para él y su familia en calidad de peón.

Si la situación de los arrendatarios argentinos es ésa, no dispondrán del 10 por ciento necesario para entregar como anticipo del precio a pagar por el predio que se les adjudique. Esta es una primera dificultad seria, que acaso ponga una piedra de tropiezo dentro del camino de la ejecución de la ley, porque recordemos que los arrendatarios argentinos que han podido convertirse en propietarios lo han venido haciendo en los últimos años.

El señor ministro de Agricultura, en el discurso pronunciado en Bell Ville, recordó que durante los últimos seis años y en función de los préstamos agrarios del Banco de la Nación Argentina utilizando los préstamos para adquisición de propiedades, 3.200 agricultores se convirtieron en propietarios de 600.000 hectáreas, lo que significaría que cuando los arrendatarios están en situación holgada en razón del nivel de precios y facilidades de colocación, tienen los recursos para ir haciéndose propietarios sin

necesidad del mecanismo un poco complicado de esta ley. Seiscientas mil hectáreas han pasado a ser propiedad de los campesinos que las cultivan en los últimos seis años según información del señor ministro de Agricultura. De modo que son los agricultores más pobres los que solicitarían ser peones, según el señor diputado por la Capital, los que tendrían opción a esas tierras que les adjudicaría la ley que discutimos. Y como a su vez hay otra serie de obligaciones de carácter económico que pesarían simultáneamente sobre los mismos, le restan aliente a las perspectivas seductoras que el Estado aspira a ofrecerles. Por otra parte, al presentarse a comprar predios que les entregaría el Estado según esta ley, el agricultor no queda libre. Aparte de la tutela técnica del consejo nacional agrario, que le durará larguísima años, se le crea una situación legal un tanto embarazosa y que ha sido señalada por el señor diputado por la Capital, doctor Pinto.

De acuerdo con el artículo 30, no podrá vender hasta no hacerse propietario, disposición justificada. Según el artículo 43, inciso b) está sujeto a rescisión en caso de atraso en el pago, y según el inciso c) del mismo artículo, está sujeto también a rescisión cuando no cumpla con cualquiera de las otras disposiciones de la ley. De acuerdo con el artículo 45, está sujeto a embargo del 33 por ciento de la renta bruta sin forma alguna de juicio. Según el artículo 46, su predio puede ser rematado sin forma alguna de juicio. Tampoco puede constituir hipoteca sino en favor del consejo nacional agrario y más tarde del Banco Hipotecario Nacional, cuando se convierta en deudor de esta última institución, y por fin, conforme a una cláusula de inembargabilidad incorporada a la ley en defensa del mismo agricultor, le será difícil apelar al crédito privado, desde que tendrá poco que entregar como prenda al acreedor.

Supongamos, sin embargo, de que a pesar de todas las dificultades, haya agricultores dispuestos a hacerse propietarios y que insistan en responder a la convocatoria de esta ley. ¿De qué tierras dispondrá el Estado? La ley enumera taxativamente el Banco de la Nación, el Banco Hipotecario Nacional, el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias y otras instituciones o entidades más o menos oficiales y por fin las que pueda adquirir en función del artículo 10 de la misma ley; pero preferentemente, según se desprende de las disposiciones del texto y de acuerdo con las manifestaciones del señor miembro informante, la colonización se aplicará de inmediato y durante un cierto número de

años a las tierras que pasen a poder del consejo nacional agrario, desprendidas del patrimonio de las instituciones citadas.

De modo, señor presidente, que aquello de que las chaeras expropiadas deben entregarse a quienes la cultivan, es un pensamiento generoso, fecundo, que contiene la substancia de la ley, pero que me parece quedará diferido a épocas más o menos remotas.

Si tenemos tiempo de examinar la financiación de esta ley, veremos que no sólo ocurrirá ello porque se hará gradualmente la colonización, comenzando por las tierras que se adquirirán a instituciones oficiales, sino acaso por deficiencia de los recursos con que se ha dotado al consejo nacional agrario. La expropiación de predios privados, se hará en un futuro que no me parece próximo. En cambio, las tierras de que dispone el consejo nacional agrario son aquellas que se utilizarán de inmediato. Advirtamos, ahora, que no es igual la situación de las tierras que posee el Banco de la Nación o el Banco Hipotecario Nacional, que las del Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias, prescindiendo de esas 100.000 hectáreas poseídas por el Consejo Nacional de Educación, porque me sorprende que el Consejo Nacional de Educación sea un terrateniente.

Sr. Palacio. — El Consejo Nacional de Educación recibió una donación. Al final del informe están consignados los datos.

Sr. Guillot. — Sí, digo que me sorprende, porque entendía que las propiedades que tenía el consejo, le habían sido donadas para que en ellas se construyeran escuelas en provincias y territorios. Desde luego, si hay una donación, quiere decir que estarán en condiciones de ser aplicadas, salvo que la cláusula o los cargos con que fueron hechas las donaciones impidan su enajenación.

El Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias —y eso lo dijo acertadamente el señor diputado Fassi— no tiene por qué vender. Esto es cosa clara y me parece que ha sido previsto por la misma ley en una de las disposiciones que se refieren a la forma de transmisión. El Instituto Movilizador, según su artículo 1º, debe colonizar las tierras que le sean adjudicadas, tierras que no le han costado un capital propio al instituto, sino que le han sido transferidas por los bancos a cambio de los efectivos que recibieron por compra de sus activos efectivos formados, como es sabido, con el margen contable de la revaluación del oro. En consecuencia, me parece lógico y razonable que el Instituto Movilizador, que debe colonizar,

pase sus tierras y su obligación de colonizador al consejo nacional agrario. Esas tierras, entonces, podrán ser entregadas en condiciones ventajosas a los futuros propietarios.

No ocurre lo mismo con las tierras pertenecientes al Banco Hipotecario Nacional y al Banco de la Nación Argentina. El primero se ha adjudicado estas propiedades que garantizaban préstamos hechos no con capital propio, sino con capital levantado en plaza o fuera de ella, mediante el procedimiento de la colocación de cédulas que devengan un 5 % de interés. Y hablar de que se pagará al Banco Hipotecario Nacional el valor de las tierras que éste transfiera, con el 4 % de interés, plantea un caso grave para la organización financiera de la institución, pues yo no sé si será posible decir al Banco Hipotecario Nacional que entregue esas tierras que se le pagarán al 4 % y con una amortización muy limitada. Por otra parte, se ha hablado de que estas enajenaciones estarán garantidas por el consejo nacional agrario, aunque no advierto cuál será la naturaleza jurídica y la extensión de la garantía.

Algo análogo ocurre con el Banco de la Nación. Esta no es una institución que adquiera tierras para colonizarlas *motu proprio*, sino que las recibió cuando transformó una serie de préstamos quirografarios en obligaciones con garantía real hipotecaria, cuando las deudas no pudieron ser solventadas, y entonces se hizo propietario a pesar suyo, de vastas extensiones de tierras, como lo demuestra el detalle que figura en una planilla incorporada, a petición del señor miembro informante, al Diario de Sesiones. Pero el Banco de la Nación le ha asignado a esas tierras un valor; por lo menos, el de las sumas invertidas en ellas; y si se transfirieran al consejo nacional agrario a un precio inferior, eso también ocasionará un quebranto que debe ser enjugado, dada la naturaleza del Banco de la Nación, en forma que evidentemente no ha sido prevista por este proyecto de ley.

Como se ve, la colonización se iniciará en tierras de extensión variable, de origen diverso y de costo desproporcionado. Sin embargo, se proyecta colocar a un tipo uniforme de 2 ½ % de interés y ½ % de amortización anual para en esa forma, hacer propietarios a los futuros agricultores. Y recordemos de paso, que tampoco serán propietarios de inmediato: lo serán a los 20 ó 25 años de iniciada la operación y, hasta tanto, las tierras quedarán hipotecadas, para usar el verbo que corresponde, porque estarán sometidas a una hipoteca que se puede ejecutar en condiciones realmente excepciona-

les; y, por otra parte, insisto, sometidas a la tutela técnica del consejo nacional agrario, cosa que, por lo demás, puede ser que exprese un modo de pensar personal.

Supongamos que un número crecido de actuales arrendatarios, que se ha dicho suman 160.000 ó 170.000, está dispuesto a aceptar todas esas condiciones para hacerse propietarios en función de los preceptos de esta ley. ¿De qué recursos dispondrá el consejo nacional agrario para desenvolver su vasto plan de colonización?

Algunos proyectos hablaban de una suma inicial de \$ 20.000.000 m/n. Veo que aquí se ha aceptado una suma inicial de \$ 30.000.000 moneda nacional, que será entregada dentro de un plazo de noventa días por el gobierno nacional al consejo nacional agrario. Supongo —porque no se ha dicho— que esta suma ha sido fijada en base a cálculos hechos sobre índices reales de las exigencias que podrá tener el consejo nacional agrario en el desenvolvimiento de sus planes. Pero me inquieta la comparación de dos cifras. El consejo nacional agrario iniciará sus operaciones con \$ 30.000.000 m/n. que debe entregarle el Estado federal, y sólo el valor de las tierras que debe transferir el Banco Hipotecario Nacional —en el caso de que pueda hacerse— garantizan préstamos por \$ 59.000.000 m/n. Hay una diferencia que invita a meditar.

Sr. Fassi. — ¿Me permite el señor diputado?

Es que las adquisiciones de los inmuebles de los bancos e instituciones oficiales no se pagan al contado. No se invertirá, entonces, un solo centavo de esos 30.000.000 moneda nacional.

Sr. Guillot. — A ello voy, señor diputado. Se me objetará —iba a decir— que estos pagos no van a hacerse al contado, sino en forma gradual; pero siempre resalta la desproporción entre el capital inicial y las sumas a invertir solamente en adquisición de tierras cuyo pago debe ser garantizado según el imperio de la ley.

Yo hubiera deseado que este proyecto hubiese ido a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, no por el deseo de controlar su financiación, sino porque acaso allí se habría podido sugerir alguna modificación a esta estructura financiera, en el loable designio de hacerla más viable. Sé que el señor ministro de Hacienda concurrió a la Comisión de Legislación Agraria y, se me informa, afirmó que podía entregar unos \$ 30.000.000 m/n., y que después le sería posible hacer entregas anuales de pesos 10.000.000 m/n. Yo no sé si en el momento actual, el señor ministro de Hacienda, frente al proyecto de presupuesto que nos ha manda-

do, y a la situación financiera de la Nación y a las explicaciones oficiosas emanadas del mismo ministerio y difundidas por los diarios, podría hacer la misma promesa. Por otra parte, tenemos ya una experiencia respecto a la puntualidad del gobierno cuando se trata de entregar cuotas anuales; la experiencia de la Dirección General de Vialidad, a la que se debía entregar una suma anual de \$ 10.000.000 moneda nacional, y ese compromiso se ha convertido en una deuda que parece imposible liquidar. Me inclino a creer, sin embargo, que hay un medio de financiar la contribución del Estado a la formación de los fondos al consejo nacional agrario. Me he referido recién al Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias. Parece que se ha desuadado un poco la importancia que puede tener ese instituto como fuente de recursos utilizables para solventar exigencias de carácter social en lo futuro.

Es sabido que se le entregaron al Instituto Movilizador 350.000.000 de pesos, no en efectivo, sino por una transferencia de cuentas, y que el Banco de la Nación hizo un préstamo en efectivo de 150.000.000 de pesos. No quiero entrar a resumir todo el proceso de transferencias de pasivos y de operaciones realizadas por el instituto. Quiero referirme solamente a esto: El Instituto Movilizador, en los tres años ha cobrado 52.000.000 de pesos, más o menos 17 a 18.000.000 anuales. Es cierto que la mayor parte de ese capital ha sido reinvertido en la adquisición de pasivos de otros bancos que no se habían acogido al plan primitivo: pero —y en esto el señor ministro de Hacienda podría dar una información preciosa— entiendo que se ha llegado al límite de esas operaciones y que en lo futuro el Instituto Movilizador recaudará de 15.000.000 a 20.000.000 anuales que no tienen aplicación determinada por la ley. Entonces, y esta sugestión debe ser naturalmente ilustrada por informaciones del señor ministro de Hacienda, acaso se podría recurrir a esos fondos para financiar el plan de colonización articulado por esta ley.

Yo no dejo de percibir una observación: esos 350.000.000 de pesos, que fué el margen contable de la revaluación entregada al instituto, no se transformaron en billetes ni se incorporaron a la circulación y que si se incorporaran ahora podrían producir una inflación de circulante, acaso inconveniente para la economía argentina.

—Suena la campanilla que indica la expiración del término acordado al orador.

Sr. Guillot. — Voy a terminar, señor presidente.

Hay una respuesta.

Si el desarrollo de la economía argentina exige más circulante, será necesario acrecentarlo; y si disminuye, el Banco Central, por medio de las operaciones del mercado libre, tiene el medio para mantener el nivel de circulante dentro de las exigencias de la economía nacional.

Me veo obligado a terminar, dejando para más adelante el desarrollo de algunos puntos, especialmente uno que me interesaba considerablemente: la vinculación existente entre este plan de colonización y una política demográfica que nos ha preocupado a algunos autores de proyectos, que han motivado algunas críticas, a mi juicio un poco aventuradas, de algunos señores diputados que me han precedido en el uso de la palabra. Lo haré en su oportunidad.

Solamente quiero decir esto, señor presidente. Esta ley ha sido defendida con verdadero entusiasmo por el señor miembro informante, con más moderación, pero con cariño, por el señor ministro de Agricultura; más mesurado aún en su juicio, ha sido el diputado por Entre Ríos, doctor Horne; y el señor diputado Repetto, lleno de prudente cautela ha dicho de ella que no resolverá el problema agrario, pero acaso lo ponga en vías de solución. Es con este concepto que yo lo voy a votar, disintiendo en muchos de sus aspectos, y dispuesto a colaborar en su mejoramiento en el debate en particular. Acaso no sea de urgencia votar esta ley, desde que, como dije ayer, las circunstancias han puesto un acento sobre otro punto del problema agrario argentino.

Pero si se insiste en que debe ser votado, quisiera decir esto: Sin una ley inmediata o con la demora de una ley, el país puede vivir. En cambio, señor presidente, una ley precipitada puede depararnos perspectivas lamentables, porque ya se sabe lo que cuesta en materia de esfuerzo, de trabajo, de dinero y aun de confianza, reparar los perjuicios ocasionados por una gran equivocación.

Nada más. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Presidente (Kaiser). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Repetto. — Pido al señor diputado que quiera permitirme...

Sr. Allperín. — Sí, señor diputado.

Sr. Repetto. — ... para aclarar con el señor diputado Guillot un punto que en realidad no tiene mucho que hacer con el fondo de la cuestión en debate, pero al cual el señor diputado

ha dado mucha importancia y que convendría dilucidar.

En mi exposición sobre el proyecto que se discute he citado una planilla que tomé de un libro norteamericano aparecido recientemente. El libro que se titula *Suelos y Hombres*, y es el tomo I del anuario del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, del año 1938, y trae un prefacio del ministro de Agricultura Mr. Henry A. Wallace. Yo tomé de aquí los datos que cité en la Cámara para señalar un fenómeno que, a mi juicio, es interesante que lo consideremos los argentinos, porque demuestran que en los Estados Unidos el número de chacareros arrendatarios aumenta de manera incesante desde el año 1880 —año de iniciación de esta información— hasta la fecha.

El proceso que se inicia en el año 1880, evidentemente tiene que reconocer causas distintas de las que señalaba ayer el señor diputado, como las circunstancias críticas producidas el año 1920, porque el porcentaje de arrendatarios, que era de 23,6 el año 1880, pasa a 28,4 el año 1890, a 35,3 el año 1900, a 37 el año 1910, a 38 el año 1920, a 42 el año 1930 y a 42,1 el año 1935. Quiere decir, entonces, que la causa que determina este crecimiento progresivo de los arrendatarios en los Estados Unidos tiene que ser una causa independiente y anterior a los hechos de la crisis aparecidos el año 1920: tiene que ser algo anterior.

Dije al pasar que la causa de estos fenómenos podría ser —y recuerdo con esto palabras del doctor Justo— el hecho de que algunos propietarios de chacras, cansados de trabajarlas o seducidos por la vida de los pueblos y las ciudades, las arrendaran y se fueran a vivir a los pueblos y ciudades vecinos. Esa es la explicación que dió en su época el doctor Justo. Pero estudiando ya más a fondo el asunto en este libro de donde he tomado estos datos —que trata el problema con detenimiento y bastante información— llegué a explicarme este fenómeno por la concurrencia de diversos factores.

Señala, en primer lugar, la tendencia de los chacareros arrendatarios inteligentes —aunque contrarían con su inteligencia el interés social—, de agotar la fertilidad de los suelos con explotaciones agrícolas intensivas sin dejar descansar la tierra en ningún momento, y cuando la han agotado toman otras y así sucesivamente pasan de un arrendamiento a otro. A este hecho le asigna una importancia muy grande.

Da también gran importancia en este proceso de aumento de los arrendatarios a la facilidad

con que en los Estados Unidos se ha otorgado el crédito a bajo interés, que ha seducido a los hombres ávidos de comprarse su chacra y que los ha sumido en deudas y en obligaciones que más tarde, por la caída de los precios, por las dificultades del comercio internacional, se han visto en la imposibilidad de pagar y entonces esa gente propietaria ha tenido que vender sus chacras o arrendarlas y esto ha facilitado también el aumento de esa proporción de arrendatarios.

Creo que el fenómeno tiene para nosotros una importancia muy grande, porque nos obliga a pensar siempre en este país en la existencia fatal del arrendatario, en la necesidad de que mantengamos una legislación defensiva y en la necesidad también de que ese problema lo tengamos siempre presente, porque por más que se colonice y se divida el suelo —y la estadística de los Estados Unidos lo demuestra— el número de los arrendatarios será siempre grande y las leyes y medidas que se tomen en defensa de estos últimos serán siempre necesarias. Una prueba de ello es que en los Estados Unidos se hallan ahora como estuvimos nosotros frente a ese problema, estudiando la forma de los contratos, deplorando la brevedad de los mismos, las condiciones en que se hacen, la falta de indemnización por las mejoras; en una palabra, en los Estados Unidos están hoy frente a un problema que nosotros, por lo menos en teoría, lo hemos resuelto dictando nuestra ley de arrendamientos agrícolas.

En cuanto a si hay o no cuestión agraria, no le discutiré al señor diputado Guillot siempre que él convenga conmigo en que si estas crisis de precios son crisis agrarias, en la República Argentina, hay algo más que eso: hay el latifundio, las propiedades de 50, 60 ó 100.000 hectáreas de la mejor tierra para la agricultura, que están en manos de una sola familia. Ese fenómeno no lo verá el señor diputado en los Estados Unidos, ni en Canadá, ni en ningún otro país en donde la cuestión de la tierra ha sido ya resuelta.

De manera que en la Argentina, si hemos de aceptar la interpretación del señor diputado Guillot, no hay una sola cuestión agraria, sino dos cuestiones agrarias. Existe ahora una crisis formidable de precios de venta por la depreciación que los señores diputados conocen tan bien como yo, y existe la cuestión de la tierra, que es el núcleo central del problema. Cuando no existe una opinión consciente

en el país, cuando no existe una clase campesina capaz de elevarse al poder político para gravitar aquí sobre las bancas del Congreso, o que no sabe asumir actitudes todavía más resueltas, esa cuestión no se puede solucionar y entonces no queda más recurso que dictar leyes como ésta, que encaminan hacia aquella solución, que permiten mejorar un poco las cosas y que hacen, que, andando el tiempo, tal vez despierten un tanto la conciencia que hoy falta en el campo para imponer la sanción de una reforma realmente agraria.

Nada más.

Sr. Allperín. — Pido la palabra.

La sanción de este despacho que brindará al país la ley colonizadora esperada desde hace mucho, será, sin duda, recibida con aplauso, porque permitirá la aplicación de un mayor número de elementos materiales y espirituales, en la tarea de realizar el engrandecimiento argentino. Elaborado sobre el proyecto básico del Poder Ejecutivo, tomando en consideración otras iniciativas y aceptando doctrinas que responden a la realidad nacional y sugerencias prácticas, ha merecido el apoyo de todos los sectores de la Honorable Cámara.

Se trata, evidentemente, de un gran ensayo. Quiero señalar uno de los aspectos de la cuestión que ha sido contemplado en el despacho, mas, no considerado en algunos de sus detalles que estimo substanciales y examinados con el detenimiento que considero menester. Aludo a la situación de las tierras públicas. Conocedor de la importancia que éstas tienen, vastas extensiones en que pastan los ganados ovinos del Sur, donde trabajan agricultores, ganaderos y fruticultores en el centro y hay explotaciones forestales en el Norte, considero necesario que se concuerden mejor los principios relativos a los campos fiscales en que desarrollará su labor el nuevo organismo oficial.

No bastan, en mi concepto, las ideas de orden general que contendrá la futura ley ordenando su acción con referencia principalmente a las tierras laborables. Es menester que digamos con toda claridad, en qué consiste el problema de la tierra pública y cuáles son las normas a que se ajustará el Estado para resolverlo con carácter definitivo. Lo que es de aplicación para esos campos de pan llevar puede no convenir para las tierras esencialmente pastoriles.

El problema de la tierra pública tiene que ser examinado bajo dos aspectos: el de los campos aptos para la agricultura, situados en las zonas de posible explotación agrícola y el de aquellos que por sus características propias y

por el medio sólo pueden servir, ahora y por muchos años, a la explotación ganadera. La división no ofrece mayores inconvenientes, por especial situación geográfica: en el centro y Norte están los terrenos que producen o pueden producirlo todo, granos y árboles; en el Sur, se hallan los que no admiten, en general, otro destino que el de alimentar ganado, el ovino por excelencia. Nos colocamos frente mismo a la realidad natural, no a la creada por artificios del hombre, si prescindieramos de esas condiciones. La obra legislativa, en este caso, tiene que tomar en cuenta los principios agrológicos para que resulte eficaz.

Yo no trataré con amplitud el asunto de las tierras fiscales de pan llevar, pero sí expondré la situación de las enormes extensiones de campos pastoriles, en el convencimiento de que mi aporte, que es sobre todo experimental, ha de resultar benéfico para que la futura ley satisfaga todas las legítimas exigencias, llenando en la mayor amplitud su cometido progresista.

Según informa el registro de bienes del Estado, al 31 de diciembre de 1937 el patrimonio oficial, en materia de tierras públicas, ascendía a 76.945.000 hectáreas, de las cuales la mayor parte se halla en los territorios del Sur. La mayor extensión de éstas corresponde a las denominaciones de «colonias» y «zonas pastoriles». En La Pampa, en cambio, los términos se invierten: ocupan el primer término las regiones agrícolas y lo mismo acontece en Misiones, donde ya es poca la tierra fiscal. En el Chaco hay 6.500.000 hectáreas de campos llamados pastoriles. Pero entre Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego haremos un total de 57.000.000 de hectáreas que no han sido consideradas especialmente aptas para la agricultura. La situación de estos campos tiene que interesarnos en forma muy especial.

Mi pensamiento básico, con relación a las tierras públicas, es el de que se impone entregarlas a la propiedad particular. Aunque la frase pudiera ser técnicamente objetada, diré que no concibo el hecho de que el Estado aparezca como un verdadero latifundista. Esos 77.000.000 de hectáreas que se mantienen en el dominio absoluto del Estado tienen que pasar a manos de sus legítimos pobladores para que así éstos reciban el gran aliciente a que siempre tienen que haber aspirado: ser propietarios.

Por eso, no me satisface del todo cuanto expresa el despacho con relación a este aspecto de nuestro gran problema agrario, que el ar-

tículo 8º exprese que para la realización de los fines de la ley se utilizarán «las tierras fiscales que se consideren aptas»; que el inciso c) del artículo 56 mencione entre los recursos «el producido de la venta y arrendamiento de las tierras regidas por la presente ley»; o que el artículo 72 —al que en la sesión de ayer se refirió el señor diputado por la Capital, doctor Pinto—, que es el más importante en este orden de ideas, incorpore al consejo agrario nacional la actual Dirección de Tierras. Todo eso está bien, pero es preciso algo más: que se diga que el nuevo organismo tendrá por finalidad, entre las que se le han asignado, la de proceder a la liquidación de ese enorme patrimonio constituido por las tierras fiscales.

No sostengo la necesidad de la venta por la venta misma, sino por que creo que esa enajenación progresiva significará un verdadero beneficio de orden público, trayendo aparejada una reacción muy favorable entre los pobladores que hasta la fecha no han conocido el sosiego que fuera menester, aunque su situación ha mejorado mucho en los últimos años, porque desde el Ministerio de Agricultura se observa con cariño y sin prejuicios la situación de los hombres de trabajo, elaboradores tenaces de la riqueza argentina.

¿Cómo debe enajenarse la tierra pública? Considero factible que en un término de años no muy largo ni muy breve tampoco, para no incurrir en defectos de extremo, podría ser vendida en su totalidad. Estimo que habrá mercado y preveo que no se suscitarán los inconvenientes que alguna vez han detenido a los hombres de gobierno. Dentro de 25 años, pero no antes de 10, podríamos realizar ese pensamiento de hacer propietarios, que ha sido y es la buena doctrina agraria de los argentinos. No hay que apresurarse porque se impone realizar la selección de los pobladores y no existe tampoco motivo para contenerse, porque si la tierra se coloca a precio razonable, como es preciso, para que llegue a manos del trabajador legítimo, del ocupante verdadero, no se abarrotará el mercado ni es presumible que intervengan factores antieconómicos para perturbar la labor colonizadora del consejo agrario nacional.

Es posible que se haga el argumento de que en los campos del Sur, allí donde otrora hubieron verdaderos escándalos en materia de tierra pública, se repitieran los acaparamientos, y al destruir el latifundio oficial, prepararíamos el advenimiento de los latifundios particulares. Yo no creo en eso: primero, porque sé que hay en

el país hombres enamorados de la tierra que no la entregarán por ningún concepto; segundo, por la selección de los pobladores hará que esa virtud se acreciente a la vez que permitirá entregar campos, no a los advenedizos, sino a los que en realidad se lo merecen, amén de la posibilidad de cláusulas restrictivas para casos de emergencia; tercero, porque hay una manera de evitar ese fenómeno regresivo y es el de impedir que las sociedades anónimas puedan poseer tierras agrícolas o pastoriles. El acceso de la sociedad anónima a la tierra impide que se cumpla uno de los objetivos que tenía presente nuestro gran civilista Vélez Sársfield, cuando pensaba que la propiedad se subdividiría rápidamente por el régimen de las herencias. La sociedad anónima mantiene el fondo indiviso, con los consiguientes beneficios familiares y con una consecuencia antisocial: que no se hagan presentes en esos campos los factores de población, de intensificación productiva, de distribución de riqueza, que deben manifestarse en forma normal, en vez de evitárseles artificialmente, como ocurre. Pensemos en que el Poder Ejecutivo puede establecer esa limitación o que puede el Parlamento dictar la ley que fuere menester o conveniente y no nos atemorizará más el fantasma del latifundismo, que con tanta facilidad suele agitarse en defensa de principios que, si deben respaldarse en un fantasma, no pueden ser los que merecerán nuestra aceptación.

En particular he de proponer algunas modificaciones al despacho.

Fijada la finalidad que debe tener la ley, corresponde examinar los medios.

En primer término, diré que no concibo, como cosa práctica, que la actual Dirección de Tierras recién pase a depender del consejo agrario nacional dentro de los tres años de sancionada la ley. Yo creo que debe irse a su su plantación inmediata. Así, el organismo que creamos, no bien se promulgará la ley, tendrá a su cargo la administración de las tierras fiscales. Si dentro del mismo necesita una repartición oficial, por razones de mejor gobierno, podrá tenerla. Para esto, no hace falta derogar ley alguna, desde que no existe un estatuto legal que rija la estructuración y actividad de aquella dependencia del Ministerio de Agricultura. No es aceptable tampoco que se exprese que el consejo agrario nacional tendrá a su cargo el cumplimiento de las leyes números 4.167 y 5.559, por cuanto los preceptos de las mismas tienen que ser condensados en un ar-

tículo, vale decir, someterlas al régimen de esta nueva ley.

La mensura de los campos aun no bien delimitados, el estudio de sus condiciones agrológicas, la asignación del destino que les corresponde, la confección de planos detallados, etcétera, es tarea que puede muy bien ser cumplida por la nueva entidad. No es práctico que existan dos organismos con funciones similares, y si esta razón se ha tenido en cuenta al decir que la incorporación se hará dentro de los tres años, que se convenga en que ella puede y debe producirse de inmediato.

La adjudicación de las tierras debe efectuarse en los casos de campos pastoriles, indefectiblemente mediante licitación pública, con amplia publicidad de ubicación, características, capacidad ganadera, aguadas, mejoras, canon de arrendamiento, usufructo de mejoras y previo informe de la gobernación, etcétera, para la debida orientación de los interesados. Tienen que ser preferidos los hombres radicados en las mismas zonas o inmediatas, con familia, en lo posible, y con capital suficiente.

Fija la ley número 4.167 un máximo de 20.000 hectáreas para cada concesionario, de las cuales 10.000 pueden ser entregadas en propiedad. Esa base tiene que ser modificada no tomándose como elemento decisivo la superficie, sino la capacidad ganadera. El máximo a otorgarse tiene que ser una extensión en la cual pueden alimentarse, en forma permanente, 10.000 lanares a lo más, pero exceptuando todo aumento de esa capacidad que sea debida al esfuerzo del hombre; es decir, si un campo que admita 10.000 lanares en el momento de arrendarse ve acrecentada esa capacidad hasta 15.000 por obras de riego, sembradíos, etcétera, para el consejo agrario nacional la base será siempre aquella cifra, pues de otro modo crearíamos una traba a la acción de los más emprendedores.

La unidad económica de un poblador patagónico para que constituya una verdadera fuerza progresista es la indicada de 10.000 ovinos.

Esto es muy importante, si no se quiere difundir población a base de difundir miseria.

La Comisión de Legislación Agraria, con muy buen acuerdo, ha aceptado la idea de que se constituyan consejos agrarios regionales. Considero que no es necesario que en cada territorio del Sur, donde el asesoramiento se hará efectivo, sobre todo en materia de tierras destinadas a la explotación ganadera, exista más de un consejo agrario; en cambio, es preciso que en la enumeración de quienes lo constitui-

rán se incluyan las sociedades rurales, porque allá no son las cooperativas las que abundan, sino estas otras entidades que agrupan a los productores de extensas zonas. Dejo así formuladas, señor presidente, con carácter general las observaciones de orden práctico que me sugiere el despacho de la comisión.

He querido poner de manifiesto la importancia excepcional que tiene la tierra pública, interesar a la Honorable Cámara para que en esta ley se contemple cuanto se relaciona con la distribución, administración y dirección del agro argentino, y dejar establecido que no hay motivo para temer que los fantasmas que agitan los timoratos o los mal informados pueden transformarse en realidad con el triunfo de nuestra tendencias de hacer propietarios. Quiero que mi país sea cada vez más próspero, ostentando el mayor número posible de propietarios, que por esto serán hombres felices y emprendedores. No nos contengamos por temores injustificados; actuemos en cambio con decisión serena, liquidando honestamente, como lo pretendo, el actual patrimonio oficial de tierras públicas, que no por pasar a manos de particulares dejarán de ser argentinas y no por ser legítima su enajenación actual, dejarán mañana, si fuere menester, de estar al alcance de la legislación que el Honorable Congreso quisiera sancionar por oportuna entonces y necesaria. Así habremos hecho un gran bien a la República.

Nada más. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Anastasi. — Pido la palabra.

Hace un momento encontré en la biblioteca de nuestro eficaz secretario, el doctor Zavalla Carbó, un libro de Yvon Gonet, que comienza así: «Una de las más importantes causas de la crisis que atraviesa la fe democrática es, según muchos publicistas, la lentitud de las discusiones legislativas».

Yo no quiero contribuir a la lentitud de esta discusión legislativa, y por eso la preocupación que despiertan estas palabras me autoriza a explicar el motivo de mi intervención, cuando ya otros oradores de mi partido han expuesto admirablemente nuestra posición frente a este despacho.

He notado dentro de mi propio sector una diferencia muy leve, que no se parece al abismo que hemos visto cavar dentro del grupo antipersonalista, donde, por ejemplo, el señor diputado Fassi, en una excelente improvisación, puso de manifiesto su reformismo en materia agraria, y el señor diputado antiper-

sonalista por la provincia de Santa Fe, doctor Infante, nos quiso repetir un poco la historia de Inés de Castro, «reinar después de morir», porque nos ha sentado de nuevo en el trono al viejo liberalismo manchesteriano, que estaba varios metros bajo tierra, en el sepulcro de las cosas inútiles.

He encontrado, en cambio, mayor uniformidad de criterio dentro de la representación conservadora y debo destacar la nota de emoción, de vigor, de convicción que puso el señor presidente de la comisión, diputado por la provincia de Córdoba, cuyo discurso debe destacarse por la amplitud de sus concepciones y de los nobilísimos propósitos que lo inspiran.

Vamos ahora a esa ligera diferencia de criterio dentro de nuestro bloque, a que me refería. Nuestro elocuente diputado por la Capital, el doctor Guillot, ha anotado algunas observaciones a la clasificación que del despacho hizo el señor diputado por la provincia de Entre Ríos, doctor Horne, y, desde luego, sus observaciones alcanzaban también al señor diputado por la Capital, doctor Pinto, aunque no se lo ha mencionado. El doctor Guillot clasificaba este despacho como proyecto de ley liberal e individualista. El señor diputado Horne ha formulado una apreciación fundamentalmente distinta. Yo debo declarar que suscribo ampliamente las apreciaciones de los señores diputados Horne y Pinto, y me parece, con todo el respeto que debo a la fecunda labor intelectual del señor diputado Guillot, que ellos están más dentro de lo que llamaríamos nuestra ortodoxia partidaria.

En efecto, la convención de 1937, que se reunió en un momento histórico, fijó las aspiraciones del partido en materia de reforma agraria, sobre las siguientes bases: creación de un consejo agrario nacional; distribución de la tierra en propiedad entre los productores rurales, con limitación de superficie, es decir, con limitación del patrimonio que puede tener cada productor; normas para evitar latifundios, tierras ociosas y concentración; orientación y formación de capacidad técnica; educación y organización de los agrarios en cooperativas y otras asociaciones, para resolver el problema de las industrias propias, de las máquinas y de la colocación de los productos.

Los que suscribimos aquella declaración, hacía poco tiempo que habíamos leído el libro de un ponderado ex funcionario del Ministerio de Agricultura: el ingeniero Pedro Marotta, quien en un volumen intitulado *Tierra y patria*,

publicado en 1932, decía: «Es que la agricultura argentina tiene una plaga más grande que la sequía, la langosta, la helada, la fiebre, la vizeacha, el abrojo, el médano, la inundación, el viento seco: esa plaga es el latifundio».

Ha habido, entonces, seria preocupación dentro de nuestro partido, y lógico es que sus representantes, al encontrar en este despacho comentados sus anhelos e ideales, lo saluden alborozados, estimulando sus líneas generales, sin entrar a esa oratoria de fe de erratas que se ha mezclado inadvertidamente en alguna de las exposiciones más interesantes que hemos oído.

Bien ha podido decir el diputado Horne, que estamos ventilando el problema fundamental que tiene el país: el de dar una ley agraria para toda la Nación, que determine nueva estructura social como manera de cimentar en bases más firmes y más justas el progreso general y el bienestar de todos los habitantes.

En el artículo 1º del despacho, que nunca será suficientemente elogiado, hay una referencia al mayor bienestar de los trabajadores agrarios. La comisión se ha puesto así en consonancia con las aspiraciones de la política social en estos instantes. Me refiero, por ejemplo, a un reciente artículo de la «Revista Internacional del Trabajo», de marzo de 1939, que señala cómo una nueva concepción de la política social se impone a los espíritus más allá de la simple protección de los productores contra los riesgos y los abusos sociales que se presentaban del punto de vista económico, como una acción meramente restrictiva. Ahora se concibe la política social como una acción constructiva, cuyo fin es proporcionar a los trabajadores la posibilidad de asegurarles un nivel de vida conveniente. Por eso está bien esa preocupación que pone la comisión en favor de los trabajadores rurales, en el frontispicio de su despacho; y coincide con lo que algunos ilustrados profesores argentinos como el doctor Tissenbaun, de la Facultad de Derecho de Santa Fe, han expresado, al decir que los mismos fundamentos invocados para implantar la enseñanza primaria con carácter obligatorio deben servir paralelamente para justificar toda medida estadual que tienda a desarrollar la personalidad del hombre en su sentido integral en forma y modo de no verse privado de todo aquello que le es fundamentalmente necesario para su subsistencia.

En honor del legislador argentino, debe recordarse que siempre tuvo la preocupación por comenzar de una vez la obra de colonización.

Bien dijo ayer nuestro ilustrado colega el doctor Pinto, que el Estado argentino apenas si ha jugado a la colonización. El señor diputado Palacio dió la indicación de todos los proyectos; algunos de ellos, como el de Escalante, de 1902, hubieran permitido, al decir de Emilio Coni, en un artículo de la «Revista de Ciencias Económicas», una verdadera transformación del agro argentino. Pero el Congreso jamás consideró uno solo de esos proyectos. Y ahora, bien podemos repetir con Macbeth, el personaje de Shakespeare, que «es tiempo de obras y no de palabras, descienda el pensamiento a las manos».

Aparte de los proyectos —alguno de los cuales referiré cuando se debata la política inmigratoria—, como ha dicho el doctor Pinto, el Estado argentino no ha considerado jamás con seriedad la colonización.

Ha prescindido de antecedentes tan ricos y tan copiosos como los que proporciona la legislación española. Bien ha podido expresar José María Ots, un célebre profesor español refugiado actualmente en Colombia, que dictó cursos en la Universidad de La Plata y que escribió trascendentales artículos en «La Prensa», que ya se ha desvanecido la leyenda negra de la España colonial. Por nuestra parte, observamos que el celo que puso el gobierno de España en desembarazarse de los encomenderos, no lo ha puesto jamás la República Argentina para librarse de los señores feudales a los cuales, como bien ha apuntado el señor diputado por la provincia de Buenos Aires doctor Allperín, ha entregado casi toda la Patagonia.

No es éste el momento de referir antecedentes históricos, pero yo no resisto a señalar algunos. Así, la famosa declaración del marqués de Cañete, virrey del Perú, que veía con preocupación cuánto noble llegaba al Perú, que necesitaba labradores, y decía al rey: «Vuestra majestad tiene guerra con franceses y turcos; será bien que éstos —se refería a los nobles— que quieren venir acá a hacer tanto daño, vayan allá, donde harán tanto provecho.» Valdría la pena, también, recordar unas palabras del licenciado Matienzo, citadas por Marotta: «Más labradores, y menos caballeros.»

Tentado estoy también —y anticipemos un poco el debate sobre política inmigratoria— de recordar que esa colonización española fué decididamente antirracista. Ya en 1503 el rey daba estas instrucciones: «que nuestros gobernadores procuren que los dichos indios se casen con sus mujeres en haz de la santa madre Iglesia; y que asimismo procuren que algunos

cristianos se casen con algunas mujeres indias y que las mujeres cristianas se casen con algunos indios». Y para terminar habría que recordar la enorme preocupación de la ciudad de Santo Domingo porque los coroneles se casaban con negras y con mulatas, preocupación que, transmitida al rey, mereció un prudente silencio de parte de las autoridades.

Volviendo a nuestros tiempos, sintetizaría la política argentina con este párrafo que tomo de un artículo de Siervers publicado en la «Revista Internacional del Trabajo»: «A menos de forzar el sentido de las palabras y llamar «colonización» a la simple venta o cesión a título gratuito de las tierras del dominio público, se puede decir que desde hace medio siglo, por lo menos, el Estado argentino no ha ejercido actividad colonizadora. Es necesario remontarse muy lejos en el pasado para encontrar iniciativas de colonización a las cuales el Estado se haya mezclado en otra forma que como simple vendedor del terreno.» Naturalmente la colonización ha sido entregada a los especuladores, que sólo se dedican a comprar y vender, volver a comprar y a vender, tarea absolutamente negativa; y en estos momentos son ciertas estas consideraciones de la misma revista: «es un negocio esencialmente especulativo, cuya razón de ser ha estado en el pasado en el alza automática del precio de la tierra. No parece que la colonización privada pueda jugar en el porvenir un papel considerable en el desarrollo de la propiedad agrícola. La especulación ha desaparecido —agregaré— por la fuerza de las cosas. No será este despacho el que la va a suprimir: son las condiciones en que se desenvuelve el medio agrario argentino.

Apenas ha habido alguna colonización de inspiración social, y debo destacar la obra de dos entidades: una muy próspera desde el punto de vista financiero; otra que desgraciadamente ha fracasado desde el punto de vista económico.

Me refiero a la fecunda labor de la Jewish Colonization Association y a la de la Compañía Italo Argentina de Colonización.

Entrando al despacho, él se asienta en este primer principio: la función social de la tierra. Un viento de fronda que sopla en estos instantes está agrietando nuestra vieja organización feudal. Ya no son los agitadores profesionales, ya no son los comunistas buscados afanosamente por la Sección Orden Social los que la conmueven; ahora es el señor ministro de Agricultura, cuya ausencia deploro en estos instantes. Creo que la historia va a recoger estas palabras que el señor ministro ha dicho en el

Congreso Agrario Argentino el 29 de junio: «El individualismo, traducido en la práctica en el liberalismo económico, fortificó la preeminencia del capital, puesto que contempló sólo sus beneficios en cuanto al individuo le concierne, sin tener en cuenta para nada su influencia dentro del medio para el cual actúa. Se olvidó de comprender a quienes contribuyen con el trabajo a hacerla producir. Rebaja la dignidad humana hasta tratar al hombre en su trabajo como una mercancía y se sirvió de la propiedad, instrumento de labor, como un medio de especulación.»

Y en su discurso de Bell Ville el 12 de marzo de 1939, expresaba el ministro de Agricultura: «No puede aceptarse que se dé a la tierra la característica de una mercancía sujeta a la oferta y a la demanda, pues siendo una base cierta de bienestar individual con trascendencia colectiva, realiza una función social. Aceptarla es facilitar el enriquecimiento inmotivado de unos cuantos en detrimento del bien común, aumentar el costo de la producción agraria con un factor extraño, producto de la especulación, en perjuicio de su mejor posibilidad de colocación y sin traducir para ello un beneficio general.»

En 1911 dió sus famosas conferencias en la Facultad de Derecho de Buenos Aires. León Duguit, citado por el señor diputado por Córdoba, y al referirse a la transformación general de la concepción jurídica de la propiedad, anticipó este momento precisamente. Dijo Duguit: «Deja de ser el derecho subjetivo del propietario para convertirse en la función social del poseedor de la riqueza. En vuestro país la evolución de la propiedad está indudablemente menos adelantada que en Europa, particularmente en lo que se refiere a la propiedad territorial. Casi podría caracterizar el momento en que todavía os encontráis diciendo que predomina el elemento de la propiedad especulación —llamo la atención sobre estas palabras a los abogados del viejo régimen liberal— pero al cual seguirá una época, que no está muy lejana, de la propiedad función, ya que la evolución de las sociedades, particularmente de las sociedades latinas que han llegado a un más alto grado de civilización, es semejante.»

Recordaba además que Augusto Comte en 1850 decía que para el positivismo fué sobre todo una indispensable función social destinada a formar y administrar los capitales con los cuales cada generación prepara los trabajos de la siguiente.

Ayer, después que nuestro colega el señor diputado Pinto terminaba su brillante exposición, al recoger sus hártulos, pudo obtener este pequeño volumen de la colección Labor, escrito por un profesor católico español, Severino Aznar. El señor Aznar —y hago votos por que no haya sido fusilado en estos momentos— al referirse al latifundio español en una forma más enérgica que el señor diputado doctor Repetto y al aludir al viejo concepto quirritario de la propiedad, sostiene que Comte tomó su material de los cristianos, de los católicos. Dice: «Se atribuye a Comte la teoría de la función social de la propiedad y a los cristianos que la defendemos, se nos acusa de comtianos. Lo cual es resbalar sobre la superficie del problema. Adentrándonos en él advertimos que no somos nosotros los que copiamos a Comte, sino Comte quien copió al cristianismo. Eso no es una novedad. Ya se sabe que una de las lecturas de Comte era el Kempis y que sobre él ejercieron una gran influencia Vico, Bossuet, Bonald y De Maistre.»

El otro principio es el de la limitación del dominio. Ello se advierte, con la elegancia con que lo insinuó la comisión, en un despacho que no puede declararse categóricamente renovador en estos momentos. El doctor Palacio se refirió al romanismo de Vélez. Otro abogado cordobés, ex rector de la universidad, el doctor Novillo Corvalán, protesta contra esa calificación de romanista que se hace de Vélez Sársfield y cita el artículo 2.611 del Código Civil, según el cual las restricciones impuestas al dominio privado sólo en el interés público son regidas por el derecho administrativo. «Tal artículo —dice Novillo Corvalán— consagra la doctrina de que la propiedad que él regula no es una institución intangible o por lo menos de un carácter individualista, sino expuesta precisamente a soportar todas las restricciones, en mira del interés social, que imponga el poder administrador. El artículo 2.611 —agrega— es una avenida por donde puede volcarse y se vuela una copiosa legislación: ordenanzas y reglamentos de ese carácter, leyes de alquileres que limitan precios y fijan duración de contratos poniéndose por encima de la voluntad de las partes y consiguientemente del derecho del propietario, leyes que acuerdan moratorias hipotecarias y bajan la tasa de interés de las cédulas hipotecarias, etcétera.» Agregaremos que el artículo 2.611 abre una amplia avenida donde puede entrar la reforma agraria y los aspectos que la completan, por ejemplo, la anunciada ley de determinación

del monto de los arrendamientos rurales, que nos hizo conocer el ministro de Agricultura, y la que fija el máximo de la propiedad agraria de que puede disponer cada titular.

A mayor abundamiento agregaré que le estamos cargando al derecho romano todo ese espíritu del *jus utendi* y del *jus abutendi*. El señor diputado Horne me hizo conocer un trabajo de un profesor de la Facultad de Derecho de La Plata, que constituye toda una reivindicación para los romanos, a los cuales jamás les hemos escatimado ciertas invectivas. No me refiero ya a la servidumbre de agua sucias a que se refería el insigne y talentoso Jesús H. Paz. Recuerdo, por ejemplo, la famosa frase de Heine según la cual el *Corpus Juris* era la biblia del diablo, y otras calificaciones más suaves que caracterizan el derecho romano como la dogmática del egoísmo.

El señor Elguera, a quien aludo, nos demuestra que nada es más erróneo que esos conceptos. «El interés social, dice, desempeñaba en Roma un papel importantísimo, llegando a limitar el derecho de propiedad en una forma tal que, en cierto modo, aun no lo hace nuestro derecho positivo, y menciona este pasaje que puede servir de comentario a uno de los artículos del despacho de la comisión: Aulo Gelio en *Noches Aticas* recuerda lo siguiente: Si alguno descuidaba el cultivo de su campo, lo dejaba en mal estado no labrándolo o no abonándolo, no cuidaba de sus árboles ni de sus viñedos, en otro tiempo cometía delito castigado por la ley. La represión estaba encargada a los censores, que privaban a los culpables del derecho de sufragio». Recuerda senado consultos que prohibían demoler las casas para especular con la venta de los materiales y evoca una cantidad de pasajes que demuestran que ese concepto egoísta de la propiedad no existía ni siquiera en Roma.

En el reciente libro de Josserand sobre *El espíritu de los derechos y su relatividad*, se toca el tema cuando se dice: «El derecho de propiedad, considerado tradicionalmente como el derecho indivisible por excelencia, como el prototipo de la prerrogativa absoluta, el derecho revolucionario que acepta y fortifica la herencia del pasado, reconociéndole solemnemente el valor de un atributo natural e imprescriptible, inviolable y sagrado, son —dice— resabios de una concepción milenaria, en la que el propietario es un soberano que, instalado en su casa como en una fortaleza, actúa a su arbitrio discrecionalmente sin que pueda pedirle cuenta de

sus actos y menos todavía de los móviles que lo han inspirado.»

«Sin embargo —agrega— es una concepción ésa puramente escolástica y legendaria, muy alejada de la realidad, de la cual es casi el antípoda.»

—Suena la campanilla indicadora de la expiración del término acordado al orador.

Sr. Palacio. — Hago indicación de que se acuerde al señor diputado prórroga para hacer uso de la palabra.

Sr. Anastasi. — Necesitaría diez minutos más.

Sr. Presidente (Kaiser). — La Honorable Cámara resolverá.

—Se llama para formar quórum.

—Obtenido quórum:

Sr. Presidente (Kaiser). — Se va a votar la prórroga de tiempo solicitada por el señor diputado por la Capital.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente. (Kaiser). Continúa con la palabra el señor diputado.

Sr. Anastasi. — Señor presidente: terminaba esta parte de la exposición recordando, o sintetizando mejor dicho, en el sentido de que no hay reforma agraria posible si ella no descansa sobre estos dos principios: considerar la tierra en su función social y limitar las facultades del dominio.

El despacho se inspira en estos postulados y el que tuviera duda, puede leer el artículo 1º, particularmente en su último apartado, que dice: «La propiedad de la tierra queda sujeta a las limitaciones y restricciones que se determinan en esta ley, de acuerdo al interés colectivo.»

Tocaré ahora someramente otro aspecto, que ha motivado la intervención de muchos de los señores diputados: el que se refiere al arrendamiento.

—Ocupa la Presidencia, el señor vicepresidente 1º, don Carlos A. Pita

El señor ministro de Agricultura citó las palabras de Young, que fué, si no estoy mal informado, secretario de Agricultura de Pitt. A lo largo de los siglos uno y otro secretarios de Estado concuerdan en el mismo concepto, y hay que agregar que en el discurso pronunciado por

el señor ministro en la concentración de agricultores en Bell Ville, dijo que en la reglamentación de la ley de arrendamiento que se estudia se tratará de fijar los procedimientos que permitan servir las disposiciones que contiene, pero parte de ello habrá que procurar mejorarlas creando un organismo más ágil, que actúe en cuanto al cumplimiento de la ley se refiere y que fije limitaciones a la tasa immoderada de los arrendamientos y a las obligaciones que imponen al arrendatario muchas veces arbitrarlas y al margen de aquélla. Que estas palabras sirvan de invitación al señor ministro, para que no olvide hacernos llegar el fruto de su labor en este sentido.

La cifra de arrendatarios en la Argentina es alarmante. Debo el informe relativo a la proporción entre propietarios y arrendatarios a una labor del propio Ministerio de Agricultura. El señor subsecretario me ha hecho saber que, según su estimación, el 35 % son propietarios y el resto arrendatarios. Han llegado recientemente publicaciones de diversos países, que envían elementos de juicio para la conferencia europea sobre la mejora de la vida rural, que se celebrará este año. Las comparaciones avergüenzan un poco. Finlandia, señores diputados, presenta una cifra de 65 % de propietarios y de 5 % de arrendatarios. La proporción de la República no guarda relación con la de la mayor parte de los países, donde el Estado se ha preocupado seriamente de la reforma agraria. En Holanda el porcentaje de las explotaciones dirigidas por los propietarios asciende a 56,2 %. En Rumania, dice Arturo Wauters, en *La reforma agraria en Europa*, la gran propiedad que representaba el 47 %, al día siguiente de la reforma no disponía más que del 8 por ciento. En Yugoslavia, los resultados de la legislación han sido éstos: el Estado ha rescatado 15.000 grandes propiedades que han sido repartidas entre 210.000 familias, es decir entre un millón de almas, pero en realidad, medio millón de familias campesinas han tenido acceso a la tierra como propietarias.

Yo oí en la exposición del señor diputado por Santa Fe, un elogio al régimen de los arrendamientos. Me permito contraponer a sus afirmaciones estas que encuentro en el ya citado artículo de Siewers, quien dice: «Si la agricultura argentina quiere mantenerse en sus posiciones, debe procurar por todos los medios reducir los costos de producción y asegurar al cultivador un margen de beneficio estable. Una primera consecuencia del sistema de arrendamiento es la monocultura. El sistema del

arrendamiento es causa, también, de que el rendimiento por hectáreas sea bajo. El arrendatario no se preocupa del estado en que encontrará la tierra su sucesor. La rotación de los cultivos, que evita el agotamiento de las tierras, no entra en sus preocupaciones. El arrendamiento es también la fuente permanente de descapitalización de la agricultura, en el sentido de que determina una desviación de los capitales nuevamente constituidos por el trabajo agrícola. En efecto, el producto del arrendamiento es empleado por los propietarios en otros fines que las mejoras de las explotaciones agrícolas y muy a menudo en gastos suntuarios en el país o en el extranjero».

Después, en el debate sobre inmigración, leeremos la demostración que hace el autor de cómo se puede duplicar la población agraria del país, abandonando el sistema del arrendamiento y de la monocultura.

Además del arrendamiento, ya se sabe que el principal enemigo del progreso agrícola en la Argentina, es la concentración de la propiedad agraria. Uno de los escasísimos países del mundo que da razón a la teoría marxista de concentración de la propiedad, es la Argentina. Yo creo que si leyéramos con detenimiento el libro de Aznar, a que me he referido, se llegaría a la conclusión de que el régimen argentino es más atrasado de lo que era el régimen español antes de la reforma agraria; sobre todo en materia de tierra pública, donde el Estado pudo ser un administrador diligente y eficaz, inspirándose en la tradición rivadaviana, habiendo llegado en cambio, por todos los caminos, a la creación de verdaderos señoríos feudales en la Patagonia. Procuró evitarlos un decreto de Irigoyen, del año 1917; procuró evitarlos otro decreto de Alvear y Le Breton, de 1924. Bajo la presidencia anterior, los *nababs* de la Patagonia obtuvieron, por fin, un triunfo largamente acariciado, lo que determinó que las «fuerzas vivas de la Patagonia», se reunieran en el Plaza Hotel, siendo fácil, a través de las fotografías, advertir la presencia de los grandes especuladores, de los dueños de enormes sociedades anónimas y de sus abogados. Ello motivó la actitud de un argentino, cuyo nombre merece ser recordando: el coronel Melitón Díaz de Vivar, ex director de Tierras y Colonias, quien dijo en su renuncia: «Fundo mi actitud en los hechos que en oportunidad manifestara a vuestra excelencia, en otros nuevos que me revela el decreto y en la firme convicción de que las situaciones tenazmente combatidas durante los últimos años, han de surgir. Las restricciones que

opone el decreto a las sociedades anónimas y a las personas poseedoras de más de 20.000 hectáreas, no podrán impedir en la práctica, que los latifundios se vuelvan cada vez más poderosos en regiones donde las compañías y sociedades extranjeras tienen gran hegemonía y sumo interés en ser dueñas de territorio argentino.

«Frente a esta situación, la despoblación de la Patagonia será un hecho más o menos breve: y la desargentinización de las tierras australes, su corolario. Se ha de repetir con más intensidad el fenómeno actual, efecto de la misma causa, de las tierras de propiedad de Santa Cruz y de Tierra del Fuego, territorios en los que el 92 por ciento de los lotes salidos del dominio fiscal están en poder de aquellas sociedades o compañías, en bloques inmensos recostados en sus mismas líneas de frontera».

Esto trajo la última política agraria oficial: el decreto de entrega en propiedad de los lotes a los pobladores, no fué más que la entrega a unas personas que, si no estoy mal informado, son llamados en la Patagonia «palos blancos», concepto que equivale con precisión al de *taferro* del diccionario de la Real Academia.

Celebro, pues, en sus líneas generales este despacho; le doy todo el calor de mi convicción. Ello no impedirá que en la discusión en particular apunte algunas ligeras modificaciones que respetarán su estructura.

Propondré, por ejemplo, entre las obligaciones del Consejo de Colonización, la de estudiar las condiciones de trabajo de los asalariados de la agricultura, para someter a la consideración de los poderes públicos las medidas legislativas conducentes, coincidiendo con la actividad de la Oficina Internacional del Trabajo, que ha creado una comisión especial de la agricultura.

—Ocupa su asiento, el señor ministro de Agricultura, ingeniero don José Padilla.

Propondré también la organización del régimen de la asistencia médica rural.

Este folleto publicado por la Sociedad de las Naciones con motivo de la conferencia europea de la vida rural, mueve un poco mi envidia. ¡Qué bien se ha organizado la asistencia médica rural en los países que no tienen el seguro de enfermedad! ¡Y con qué concurriríamos nosotros a una conferencia análoga? Con nada, hasta ahora.

Sugeriré asimismo, que el consejo coordine sistemas para el mejoramiento de las condicio-

nes de la vida intelectual, artística y social de los trabajadores de la tierra. El viejo conflicto entre la ciudad y el campo, se resolverá llevando la ciudad al campo.

Este otro opúsculo que estudia la organización del recreo en el campo y uno que se refiere a los problemas intelectuales de la vida rural, demuestran que en los países de Europa existe una insistente preocupación por el mejoramiento de las condiciones de la vida social de los hombres de la tierra.

Propondré finalmente que el consejo disponga la organización de los agrarios en cooperativas, para resolver el problema de las industrias propias, de las máquinas y de la colocación de los productos.

Las cifras sobre el movimiento de las cooperativas son extraordinariamente tristes para nuestro país. Debo a la amabilidad de un funcionario del Ministerio de Agricultura, la estadística al día de las sociedades cooperativas: apenas tenemos 550, cuando Alemania tiene 18.000 de crédito solamente; cuando Luxemburgo, que a lo sumo tiene 400.000 habitantes, posee 71 cooperativas de crédito, contra 45 que tiene la República; cuando Holanda tiene 1.299 cooperativas únicamente de crédito, y conste que las cooperativas de crédito han sido el medio por el cual se ha extirpado al usurero de la campaña europea. Cooperativas de máquinas casi no tenemos en la Argentina, salvo que estén incluídas en el renglón de cooperativas agrícolas, 138; Dinamarca tiene 3.129; y Finlandia, con 3.000.000 de habitantes, tiene 571 cooperativas de este género. En cuanto al aspecto jurídico del despacho, habría que referirse a dos puntos. Del primero voy a prescindir en absoluto, el que se refiere a la posibilidad de expropiación en las provincias para fines de utilidad social. Dijo bien el señor diputado por Córdoba, que seriamente ya no se puede discutir ese asunto. Pero quiero referirme al segundo aspecto, y siento que no esté presente el señor diputado por la provincia de Santa Fe, que ayer nos anunció la muerte de la ley de colonización en cuanto llegara al tribunal. Yo preguntaría, estando él presente, en qué funda ese presentimiento tan trágico; no estando, lo dejo para la discusión en particular.

Yo no comprendo por qué puede ser declarada inconstitucional la ley por las disposiciones relativas a la expropiación. Creo que el señor diputado por Santa Fe hizo alusión a los criterios de determinación del valor de la propiedad. La comisión, si no estoy equivocada, fija el valor de la renta; coincide con el

criterio de la Corte en ese fallo que hemos citado tantas veces en la Cámara cuando dijo que «un bien vale por la renta que produce». Y entonces ¿dónde está la divergencia de criterio entre la ley y la jurisprudencia de la Corte y la jurisprudencia de Estados Unidos.

¿Cuál podría ser otro motivo de inconstitucionalidad? ¿Creerá tal vez el señor diputado por la provincia de Santa Fe que cada propiedad que se expropie requiere una ley? Si tan extraña fuera la pretensión, le contestaríamos con los copiosos fallos de la Suprema Corte que dicen que el requisito constitucional de que la utilidad pública de la expropiación deba ser calificada por ley, no obliga al Congreso a dictar una ley especial para cada una de las propiedades afectadas por la obra de utilidad pública, bastando la autorización para expropiar que haga la ley, calificando la obra de cuya construcción se trata.

¿Será tal vez inconstitucional porque habría una delegación de la función legislativa al consejo agrario de colonización y al Poder Ejecutivo? Sobre eso no tenemos precedentes en la Argentina, según creo, pero tenemos diversos fallos en Estados Unidos. Los tribunales de Estados Unidos han declarado reiteradamente que la forma y manera de ejercitar la facultad de expropiación por razón de utilidad pública es de exclusivo resorte de la Legislatura; y aunque tal facultad sea delegada, es obligatorio para las cortes darles pleno efecto. Los tribunales de Estados Unidos se rehusan no sólo a examinar el alcance de la utilidad pública que el legislador fija dentro de su criterio, sino que se rehusan también a examinar si ha sido posible o no la delegación.

Tales son, ligerísimamente expuestas, las razones que me mueven a prestarle toda simpatía a este despacho subscrito por los miembros de todos los sectores y en el cual, aparte de la coincidencia con el señor ministro, debe señalarse la parte importante y trascendental que ha tenido nuestro colega el señor diputado por Entre Ríos, nuestro gran publicista agrario cuyas obras, cuyas enseñanzas nos han ilustrado a los neófitos, y cuyos principios han sido aceptados por la Unión Cívica Radical. Los miembros de ésta han de celebrar que casi todos esos principios hayan sido recogidos por el despacho de la comisión.

Esta sanción, señor presidente, con toda su suavidad y timidez, significa un momento histórico en la economía argentina. Los señores diputados recordarán aquel famoso pasaje de

Anatole France, cuando un robusto pingüino descarga su maza sobre otro pobre pingüino que estaba cultivando sus lechugas bajo el cariño protector del sol. Lo mata y se apropia de su lote; Anatole France dice gravemente: «Está naciendo el derecho de propiedad».

Nosotros, en este debate tan tranquilo, sin pasiones, con una amplia concordancia, con meras discrepancias de escuela podemos decir: está naciendo el nuevo derecho agrario argentino. No ha nacido todavía armado de punta en blanco, como lo quisieran los teóricos, porque ya saben los señores diputados que únicamente Minerva nació armada de punta en blanco. Lo demás es obra de retoques, adiciones, enmiendas y experiencias; pero así y todo la comisión nos ha colocado, tranquila y eufóricamente, un caballo de Troya, en el recinto de la economía feudal argentina. Debemos agradecerle ese gesto, porque al viejo régimen agrario argentino hay que formularle la brava requisitoria que planteaba Echeverría en 1837: «Industria que no tiende a emancipar las masas y a elevarlas a la igualdad, sino a concentrar la riqueza en pocas manos, la abominamos; al que mire atrás y sonría cuando suene la trompeta de la regeneración de la patria, anatema».

Señores diputados: no hay que mirar atrás en materia agraria. Ha hecho bien la comisión en desligarse de un pasado que no le enseña nada, por lo menos desde nuestra organización constitucional. Al presentarnos este despacho en sus líneas generales, ha recogido el anhelo de los trabajadores de la tierra, acariciado durante varias generaciones, ha prestado oído al clamor de las campañas cada vez más insistente, porque precisamente lo más rudo del trabajo coincide con la inutilidad del esfuerzo. Cumple así la comisión y cumplimos nosotros, si le prestamos esta amplia colaboración que yo ofrezco para ella, un deber con las masas argentinas. Nuestros padres le dieron libertad política; no pudieron darle libertad económica y ello fué causa de tanto malestar según nos lo ha enseñado José Manuel Estrada en sus famosas *Lecciones sobre historia argentina*.

Pero un gobierno y un Congreso que devuelvan al pueblo la libertad política y le aseguren su emancipación económica, han cumplido el mejor de los programas.

Una ley de colonización, ha dicho la conferencia reciente de Mendoza, que contemple de manera integral los problemas de la tierra en todo el país, constituye una de las sentidas necesidades de la Nación, no sólo porque permi-

tirá detener el crecimiento anormal de nuestras poblaciones urbanas radicando en el campo un alto porcentaje de hombres que hoy se malogran en la vida de las ciudades, sino porque con la división de la propiedad se hallan vinculados todos los grandes problemas argentinos.

Que este voto de la conferencia, tan oportunamente reunida en Mendoza, y la sanción de la Honorable Cámara, sea uno de los primeros jalones a clavar. El segundo, lo clavaremos cuando vuelva a ser realidad la política de puertas abiertas para todos los trabajadores del mundo y no se pueda repetir más la amarga verdad con que un órgano de la prensa nacional calificaba la política inmigratoria actual: «la Argentina, tierra de promisión... a la que no se puede llegar».

He terminado. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Fassi. — Pido la palabra, para una breve rectificación.

Sr. Presidente (Pira). — La ha solicitado antes el señor diputado por la Capital.

Sr. Fassi. — Pido permiso al señor diputado para hacer una breve rectificación.

Sr. Dickmann. — Con mucho gusto.

Sr. Fassi. — Mi distinguido amigo y erudito diputado por la Capital, doctor Anastasi, al comenzar su exposición ha manifestado que los dos diputados de mi sector que han usado de la palabra en este debate sobre colonización, han formulado puntos de vista, separados por un profundísimo abismo; y ha dicho después que, por el contrario, entre los diputados del sector radical del comité nacional sólo se han evidenciado levísimas diferencias de concepto. Lo que no le ha impedido manifestar en seguida que existía una disensión fundamental entre los conceptos expresados por el señor diputado Horne y los del distinguido diputado Guillot.

Yo quiero decir que en nuestro sector no existe una anarquía de ideas que sea propia de nuestro partido político. En realidad es preciso no olvidar que nuestro partido y el del señor diputado por la Capital son dos ramas del mismo tronco: la tradicional Unión Cívica Radical; y en consecuencia tiene las cualidades y los defectos de ese gran movimiento nacional y no es posible hacer distingos como los que ha hecho el señor diputado.

El Partido Radical fué en su origen un movimiento esencialmente liberal y no podía ser de otra forma porque los partidos tienen que estar en consonancia con los tiempos, tienen

que ser expresión de las ideas ambientes, de las corrientes doctrinarias formadas en cada época. No es raro, entonces, que frente a los nuevos problemas que plantea la economía nacional e internacional se vayan diseñando tendencias que aparecen como contrapuestas a los que fueron los tradicionales principios de la Unión Cívica Radical.

Tales disidencias, lejos de representar una situación de anarquía, demuestran que se trata de un movimiento vivo, en marcha, en que fuerzas nuevas tratan de darle un colorido en consonancia con los problemas de los tiempos. Nuestro partido, la Unión Cívica Radical del centro, es un grupo orgánico, con una dirección perfectamente definida y en que las expresiones del señor diputado por Santa Fe y las del diputado que habla, aunque divergentes en apariencia, presentan puntos de vista que concuerdan con el gran movimiento que representa nuestro partido.

Nada más.

Sr. Guillot. — Pido la palabra para una rectificación.

Seré muy breve porque comparto con el señor diputado Anastasi la aversión por la oratoria de fe de erratas y por la elocuencia de fichero. Voy a ser preciso y concreto. Por otra parte, cuestiones sobre ortodoxia o heterodoxia partidaria no se discuten en el recinto de una Cámara legislativa, sino en la convención del partido político a que se pertenece.

Insisto en un pensamiento que ayer no pude desarrollar: es antojadizo adjudicar al individualismo liberal el fracaso de la colonización en la República. Hombres que pertenecemos a un partido político que ha hecho un proceso público y reiterado acerca de los profundos errores y de las grandes corruptelas en que se incurrió en la distribución de la tierra pública de la Nación, estamos en condiciones de determinar cuáles son las causas originarias de ese fracaso, que no está, evidentemente, en la aplicación de los principios de individualismo liberal.

Me parece arbitrario eso de colocarme en una situación que evidentemente está alejada de la realidad. Cualquiera diría que el diputado que habla ha sido un defensor del latifundio y que cuando ha dicho que la ley que discutimos tiene un carácter individualista, se opone al principio de la adjudicación de la tierra a los agricultores, con limitación de la superficie. No ya una frase, ni siquiera una palabra, ni una tilde de mi discurso, pueden

dar asidero a esa aseveración. En cambio, si me he referido al pensamiento liberal y a todas las grandes cosas que se han desarrollado a su amparo, lo he justificado haciendo un rápido análisis retrospectivo, pero no he anelado en ese concepto cuando he reconocido que el mismo liberalismo rectificó, no sus principios, sino la aplicación de los mismos, cuando vió que una aplicación demasiado rígida perjudicaba el concepto de justicia social.

Finalmente, quiero dejar perfectamente establecido que cuando me he referido al carácter individualista de esta ley, no desconocía que ella se incorpora a un principio jurídico que se aparta del concepto liberal: el de la función social de la propiedad, concepción ésta que no es inédita ni en la jurisprudencia ni en el derecho positivo argentino. La jurisprudencia citada por el señor diputado por la Capital —cuya erudicción admiro siempre—, a propósito de la ley número 11.157, que votaron los diputados radicales que lo eran antes de 1937, ya desentrañaba de la constitución liberal y de las leyes dictadas en su consecuencia, el principio de la función social de la propiedad. En ningún momento he desconocido la valiosa colaboración del señor diputado Horne, cuyo pensamiento se ha incorporado a esta ley, por lo que refuto injusto hacerme aparecer como un corrector de las ideas del señor diputado Horne, cuando, por el contrario, si bien acentuaba yo mi pensamiento de que esta ley es individualista, reconocía que hacía jugar bajo su influjo un principio fecundo que no pertenece al pensamiento liberal.

Nada más. (*Muy bien!*)

Sr. Presidente (Pita). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Dickmann. — Señor presidente: en nombre del grupo parlamentario socialista habló el señor diputado Repetto, y en su discurso ha sintetizado en forma cabal las ideas y los propósitos que en materia de reforma agraria animan al Partido Socialista. Casi no habría nada que agregar a su exposición. No obstante, en este interesante debate, que yo califico de fecundo por la cantidad de principios teóricos y de propósitos prácticos que en él se dilucidan, cabe más que un discurso alguna acotación al margen del debate.

Dentro de la discusión en general, pasamos ahora al aspecto de complementar, de agregar algunas consideraciones que juzgamos útiles y eficientes.

Ya que se ha reivindicado prioridad para ciertos grupos y partidos respecto a sus propó-

sitos en materia agraria, es necesario afirmar que el Partido Socialista desde hace treinta y siete años agita con creciente afán y acopio de elementos y de ideas este grande y grave problema argentino. Recuerdo que en 1902, el doctor Juan B. Justo, médico rural, en aquel entonces en la ciudad de Junín, — adonde había ido con el propósito de estudiar en el terreno el problema agrario más que con el objeto de ejercer la profesión— dió una conferencia publicada luego en folleto con el título de «El programa socialista del campo». Si los señores diputados tienen alguna curiosidad por los antecedentes históricos y por lo que dejó como herencia mental aquel gran cerebro, les recomiendo la lectura de ese folleto.

En ese pequeñísimo folleto, en forma clara y precisa, como era su característica, el doctor Justo planteó todo el problema agrario. Y lo hizo desde el punto de vista de los arrendatarios, fundamental problema agrario argentino. El hecho de que sancionemos una ley que permita el desarrollo de la pequeña propiedad rural, no debe hacernos perder de vista el problema del arrendatario. Hasta que el arrendatario argentino se transforme en propietario, correrá mucha agua bajo los puentes. El doctor Justo, ya en aquel entonces, puso las bases de la futura reforma agraria argentina.

La evolución de la pequeña propiedad rural en otros países hacia el arrendamiento: es decir la disociación del trabajador de la tierra y de la propiedad de la tierra, es un fenómeno que debe tenerse muy en cuenta. Hemos tenido sobre ese asunto ideas invariables. Siempre he sido ferviente partidario de la pequeña explotación rural. Si bien soy partidario de la pequeña propiedad rural, aceptaría teórica y prácticamente la posesión segura del predio rural.

Sé que hay muchos trabajadores del campo que no hacen hincapié en la propiedad del pedazo de tierra que cultivan. Con tal que se les deje mucho tiempo sobre el mismo, que se les indemnice por las mejoras que introduzcan y que se establezcan reglas precisas para el arrendamiento, no hacen cuestión por la propiedad.

Algunos sostienen que en el estado actual del valor de la propiedad de la tierra, casi con un pequeño capital, conviene más ser arrendatario que propietario. Repito que somos partidarios de la pequeña propiedad rural, sin necesidad de hacer una gran disquisición teórica sobre ello. Si bien la erudición adorna un poco el debate, me parece que no hay por qué mezclar en este asunto el liberalismo manchesteriano y el indi-

vidualismo. Si yo tuviera que definir la tendencia de la nueva ley, diría que es una ley individualista, aceptando la definición del señor diputado Guillot, no en el sentido de calificar la propiedad en general como servicio social —en lo que estamos de acuerdo— sino porque crea una clase social de propietarios individuales.

Vamos ahora al aspecto práctico del problema. Cada país tiene su problema agrario y los antecedentes, la legislación, los hechos que se producen en otras naciones, pueden servir para comparar, estudiar y resolver el propio problema agrario de un país. ¿Cómo vamos a comparar la reforma agraria en un país de densa población, de propiedad fragmentada hasta el infinito, de ultraproteccionismo agrario, con otro de escasa población, de grandes propiedades rurales y que cifra el progreso de la economía rural precisamente en el librecambio? ¿Cómo vamos a comparar el problema agrario de un país, donde los que labran la tierra viven en ella desde generaciones, desde siglos, desde milenios; con otro, donde la población rural es aún aluvión inmigratorio? En aquellos países el hecho precede a la ley y en el nuestro la ley debe preceder al hecho.

Las reformas agrarias legislativas realizadas en los últimos tiempos en los países europeos han venido a sancionar y consagrar una verdadera revolución social producida después de la guerra. Los trastornos fundamentales del mundo europeo, de la posguerra, han sido principalmente agrarios. Así la inmensa revolución rusa fué el cataclismo de un régimen social feudal y las reformas fueron fundamentalmente agrarias. En el centro de Europa también ha habido profundas revoluciones agrarias y las leyes y constituciones han consagrado un estado de cosas ya realizado en los hechos. Las contrarrevoluciones que se han producido en Austria y también, en parte, en Alemania e Italia y estoy seguro que ahora en España, no tocarán las reformas ya realizadas en el terreno agrario. Sucederá lo que sucedió con la Revolución Francesa: el ciclón de la Revolución Francesa ha sido esencialmente agrario: ha expropiado la tierra al clero, que tenía un tercio del suelo francés; ha expropiado a la nobleza y a la corona, para distribuirla entre los cinco o seis millones de campesinos franceses. Y cuando se produjo la contrarrevolución con el advenimiento de Luis XVIII, lo que quedó consagrado fué la reforma agraria.

Tal es el estado de cosas en los viejos países europeos densamente poblados por hombres, que

desde hace varios siglos residen en el suelo, lo trabajan y no han sido propietarios de él. Entre nosotros las cosas cambian fundamentalmente. Aquí no hay población rural de siglos; no es densa, es casi advenediza, trabaja en la tierra desde hace una generación, o bien lo hacen directamente los inmigrantes. En realidad no tienen el derecho consuetudinario ni tienen el derecho histórico, ni tienen la cohesión nacional y racial necesaria, ni tienen el vigor ni el conocimiento para consumir hechos y después venga la ley a consagrarlos. Y entonces la revolución —si revolución hay en ese terreno— debe venir desde arriba en vez de venir desde abajo. Yo atribuyo ese sentido a esta ley. Es una reforma que puede ser una verdadera revolución. Las revoluciones no siempre son sangrientas, ni violentas; pueden ser legales y a veces son más fundamentales que las realizadas por la fuerza. Una ley de esta naturaleza puede significar una revolución, que cambie el régimen de propiedad y permita el advenimiento de una clase rural, y el desarrollo de una gran población en la campaña. Desde ese punto de vista, nosotros saludamos la sanción de esa ley y saludamos más que la misma sanción de la ley, los conceptos que en este recinto se han vertido, que traducen una verdadera revolución en el pensamiento de los hombres.

Hace un cuarto de siglo hubiera sido inconcebible el lenguaje que han usado ahora oradores de los sectores conservadores y radical. —no me refiero a los socialistas porque siempre tienen las mismas ideas al respecto —y sobre todo el lenguaje empleado por el señor ministro de Agricultura, miembro del Poder Ejecutivo nacional. Eso indica una transformación de sentimientos y de ideas. Si es ése el estado mental de los que gobiernan y dirigen la opinión pública en la Argentina, la ley puede resultar una gran ley. Dependerá, señores diputados, en qué manos ella será depositada, con qué inteligencia, con qué sentimiento, con qué ideas se ha de poner en movimiento este instrumento legal. Por eso es muy importante este debate, en el que no se pierde tiempo. Es una ley que el país espera desde hace medio siglo y dedicarle un mes, casi diría un período parlamentario para dilucidar amplia, profunda y fundamentalmente los conceptos que en ella están encerrados, sería tiempo bien ganado. De manera que no me asocio al párrafo del libro que el señor secretario depositó en manos de mi estimado colega el señor diputado Anastasi. No me va a detener ese párrafo en la discusión, sino el

reglamento, que no me permite usar de la palabra todo el tiempo que necesite. *(Risas.)*

Evidentemente, señores diputados, una ley de colonización que se discute y sanciona en el año 1939 no puede tener ni el alcance ni la trascendencia, ni el concepto de una ley de colonización discutida y sancionada en el año 1876.

En el mundo y en el país argentino las cosas han cambiado fundamentalmente. En la técnica, en la economía, en la política, en el concepto social se han producido cambios esenciales y fundamentales; y estos cambios repercuten en forma indiscutible, no sólo sobre el trabajo urbano, sino también sobre el trabajo rural.

¿Qué perseguimos con esta ley? ¿Aumentar nuestra producción agrícola? Sería una insensatez, ahora. No sabemos qué hacer con nuestra producción agrícola actual; el mundo está atiborrado de productos agrícolas; han entrado en explotación vastas zonas de continentes lejanos, que hace medio siglo estaban casi ignorados. Las mismas viejas y agotadas tierras europeas, por métodos técnicos, químicos y biológicos, han aumentado su producción. La diversificación del alimento del hombre ha puesto cierto límite a los productos básicos de la tierra. La producción agrícola en cierta medida y en ciertos países ha crecido más que el progreso demográfico.

Si nosotros nos propusiéramos con esta ley única y exclusivamente aumentar nuestra producción, aumentar la riqueza del suelo, repito, sería un contrasentido.

De manera que es indispensable considerar desde su aspecto general este problema.

Hay una diferencia fundamental entre la industria propiamente dicha y entre el trabajo rural. En la industria, prácticamente no hay límite ni a la producción ni al consumo. Una fábrica que produce tejidos o zapatos, puede trabajar los 365 días del año y las 24 horas del día y puede producir al infinito, sin limitación. Para esa industria no existen las estaciones, que tanta influencia tienen en la agricultura, no existen los fenómenos climáticos, que tanta influencia tienen en la agricultura, no existen las enfermedades biológicas de las plantas, que son seres vivos; y el consumo puede ser también infinito. Una persona en vez de tener un par de botines, puede tener cinco o diez. Se me informa que hay algunas personas en el mundo que tienen como cuarenta pares de botines. *(Risas.)* Yo no tengo más que uno. *(Risas.)*

En la agricultura las cosas pasan completamente al revés. Eso se debe a que la agricultura no es una industria que opera sobre materia muerta, sino sobre seres vivos. En ella todo está íntimamente vinculado al mundo biológico y su producción varía según el clima, según las estaciones, según los países, según la sequía, según los vientos. Miles de factores intervienen en ella, y por otra parte su consumo necesariamente está limitado. Un hombre puede comer 500 gramos de pan, pero no puede comer cinco kilos; un hombre puede comer 500 gramos de carne, pero no varios kilos. El consumo está necesariamente limitado.

En los últimos años, según estadísticas precisas, ha ocurrido una verdadera revolución en la alimentación de los hombres. A eso se atribuye en buena parte la crisis del trigo. Los pueblos más pobres y miserables eran grandes consumidores de pan; casi no comían otra cosa. A medida que el bienestar aumenta, la alimentación se diversifica y el pan es entonces uno de los tantos factores que intervienen en la alimentación: su consumo se limita. Lo mismo ocurre con la carne.

Por consiguiente, hay que comprender que una ley de colonización en 1939 en el país argentino, no puede tener por propósito aumentar la producción para el mercado internacional. En las cabezas de algunos señores diputados y de algunos publicistas, perdura la idea de la gran maquinaria, de la gran producción y que hay que abaratar la producción para poder competir en el mercado internacional.

No desconozco que hay alguna verdad en estos conceptos, pero una ley de colonización debe tener, entre nosotros, principalmente, por propósito aumentar la población; y con este aumento, el del consumo interno. El excedente de la producción debe colocarse en el mercado internacional. ¿Es eso lo que persigue la ley? Si así fuera, bienvenida ella.

Hay otro aspecto que desearía analizar. Se ha hecho hincapié con cierta extensión —para demostrar la necesidad de fragmentar el latifundio y de poblar el agro argentino—, sobre el tan debatido proceso que se ha producido en todos los grandes países, incluso el argentino: el aumento de la población urbana a expensas de la rural.

Algunos lo consideran un grave síntoma y hasta un grave mal que urge remediar.

Y bien; a los fenómenos sociales no hay que considerarlos desde el punto de vista ético, aunque ello es importante, porque los fenóme-

nos éticos no gobiernan a los económicos y sociales: lo ético surge de los fenómenos sociales; no los engendran.

Este fenómeno del éxodo rural y del aumento de las poblaciones urbanas, se ha producido durante el siglo XIX en gran parte de Europa. Hay un libro clásico del eminente socialista, hace poco desaparecido, Emilio Vandervelde, que creo fué una de sus primeras obras, intitulado *Exodo rural*. Y hay otros estudios sobre ese punto.

¿A qué se debe el éxodo rural? Con su exacta comprensión del fenómeno evitaremos incurrir en errores de legislación. Si comprendemos que es un fenómeno natural, lógico e inevitable, no habrá que empeñarse demasiado en remediarlo; y si se quiere remediarlo habrá que hacerlo con otro concepto.

El éxodo rural se produce por una serie de fenómenos. Antes había en el campo, además de la industria rural propiamente dicha, una serie de trabajos anexos o conexos. El campesino no producía solamente las cosas de la tierra; en la casa del campesino se tejía, se hilaba, se producían las cosas necesarias para la industria. Todo eso se ha ido separando de las tareas rurales; lo que es industrial propiamente dicho se ha transformado en urbano, y el trabajo rural se ha liberado de todo lo accesorio. Y se ha liberado con una gran ventaja para el trabajo rural. El campesino consigue herramientas, vestidos, calzado, etcétera, y muchas cosas que necesita para su trabajo y vida, más baratas y de mejor calidad que lo que él mismo producía en su chacra. Eso ha permitido el desarrollo de la gran industria, y ha permitido que el campesino se dedique a su trabajo específico. Eso ha sacado de la campaña una enorme cantidad de gente, llevándola a la ciudad. Es un fenómeno perfectamente lógico contra el cual nadie osaría ir.

Otro fenómeno que se ha producido en el campo y que en los últimos años ha tenido verdadera trascendencia es el progreso técnico en las tareas específicamente rurales. Ya nadie piensa aquí en cortar el trigo con la hoz o con la guadaña; la hoz y la guadaña han persistido en España y en el centro de Europa hasta los últimos años y tal vez en algunas regiones todavía existan. Hace dos años, en una visita a Chile, he visto en algunos fundos rurales trabajar con hoz. De nuestras tareas rurales ha desaparecido el mayal con que se trillaba, como ha desaparecido la trilla con yeguas. El progreso técnico en las tareas rurales ha marchado

paralelamente al progreso técnico de las ciudades, y ha tenido un salto considerable.

—Suenan la campanilla que indica la expiración del término acordado al orador.

Sr. Medina. — Hago moción para que se conceda un plazo mayor al señor diputado.

Sr. Dickmann. — Hablo en nombre del bloque socialista. El doctor Repetto habló en nombre de la comisión.

Sr. Presidente (Pita). — Si habla en nombre del bloque, puede continuar con la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Dickmann. — Yo recuerdo, señor presidente, que hace cuarenta años, cuando ya el progreso había traído la trilladora —son recuerdos de carácter personal— aun con la trilladora la cosecha era en la Argentina una tarea considerable. Una trilladora era una máquina que, con su locomotora y con sus anexos, ocupaba a cuarenta hombres. En el país había miles de trilladoras. El campamento de una trilladora era un pequeño mundo.

Ahora, con la cosechadora, el chacarero, con un hijo o con una hija, realizan la tarea que hacía la antigua trilladora con cuarenta personas.

Saben los señores diputados todo el trabajo que tenían los hombres en la campaña en tiempo de la cosecha, que duraba dos o tres meses, si no más. Hubo un tiempo en que para levantar la cosecha argentina venían miles de hombres llamados «inmigrantes golondrinas», que trabajaban durante el verano, época que coincidía con el invierno europeo, y después se reintegraban a su país llevando el producto de su trabajo: sus salarios, altos salarios en comparación con los de sus propios países, porque eran inmigrantes de España y de Italia. Hoy se levanta la cosecha argentina sin los treinta, cuarenta o cincuenta mil inmigrantes golondrinas que los hemos visto y conocido nosotros.

El conocimiento de la técnica agrícola, difundido —lo reconozco, por el Ministerio de Agricultura de la Nación—, el mejoramiento del trabajo, la selección de la semilla y las indicaciones útiles sobre la siembra y la cosecha, etcétera, han mejorado considerablemente el rendimiento de las siembras, y todo eso ha producido el fenómeno del éxodo rural. Con la técnica moderna, con la supresión de todas las tareas accesorias que se realizaban en las chacras, se produce hoy mucha mayor cantidad de productos con mucho menos hombres. Es un fenómeno que hay que comprenderlo, y no condenarlo como una aberración, como una de-

gradación de la especie humana, como un fenómeno moral repudiable: en la campaña se produce más con menos hombres.

Ahora, si ello es verdad y es indiscutiblemente verdad ¿cómo he vinculado yo este problema con la población? Afirmando que el principal propósito de una ley de colonización sancionada en 1939, debe ser el de aumento de la población. Por eso, no comparto la idea de que esta ley sea esencialmente de colonización interior. Me parece que con ello se malograría gran parte de su propósito.

Comprendo, aprecio, valoro la necesidad de facilitar a los arrendatarios el convertirse en propietarios; a los hijos de los agricultores establecerse como chacareros autónomos, el formar un nuevo hogar. Aprecio y valoro la necesidad de acostumbrar al peón nativo, al peón criollo a arraigarse a la tierra y convertirse en cultivador. Considero eso una tarea santa, pero muy difícil. La ley debe tener principalmente por objeto, y en ello coincide con la idea del señor diputado Anastasi, traer hombres del mundo para trabajar el suelo argentino.

Hay que poblar la campaña con agricultores autónomos, no para que hagan fábricas de trigo, no para aumentar el monto de nuestra exportación, sino para formar almácgos humanos, para que familias numerosas trabajen, principalmente para su propio consumo y para el consumo de los habitantes de las ciudades. ¿Qué trascendental importancia tiene, señores diputados, para el trabajador rural el desarrollo y el crecimiento de las ciudades que no es un fenómeno que conspire contra la campaña sino, al contrario, es la creación del gran mercado de consumo! ¿Qué harían las granjas y las chacras y los productores de fruta, de azúcar, de uva, de vino, si no hubiera grandes ciudades como mercados de consumo? Hay que aumentar la capacidad consumidora de la gente que absorba la producción de la campaña, que es el gran fenómeno de intercambio entre el campo y la ciudad. La ciudad fabrica para la campaña los productos manufacturados, y ésta da a la ciudad la materia prima para su alimento, su vestido y su calzado. Por eso, para la campaña es importante que las ciudades crezcan, porque se desarrolla así el gran mercado interno de consumo.

¿Puede alguien pretender que ha importado un daño para la campaña el gran desarrollo de la ciudad de Buenos Aires? Creerlo sería un error que es necesario destruir. Si en el país se desarrollaran grandes centros urbanos, todas las regiones agrícolas de su alrededor se-

rían prósperas. La diversificación de la producción granjera requiere ineludiblemente del consumo de las grandes ciudades.

No es de mayor importancia la extensión de la chacra, de que se habla ahora. Vale tanto o más radicar una familia de agricultores en un predio de 10 hectáreas aunque sea de alto valor —por ejemplo, de 1.000 pesos—, siempre que esté próximo a los grandes centros de consumo, que radicarla en 100 hectáreas que valgan 100 pesos cada uno, lo que daría los mismos 10.000 pesos como valor, pero ubicadas lejos de los centros de consumo y de producción para la exportación. Hay que pensar en poblar el país con familias numerosas en pequeños predios, a fin de que la producción se intensifique y diversifique.

Considero que no puede darse una opinión precisa, dado el estado actual de las cosas, sobre la financiación de la ley. Es posible que haya algunos aspectos que en los actuales momentos puedan ser considerados poco viables. ¿Pero quién puede opinar sobre el futuro del desarrollo de la agricultura y de la población en la Argentina? A veces una iniciativa que parece prematura y casi temeraria resulta una gran iniciativa con el andar del tiempo, de resultados completamente inesperados para sus autores.

El propósito esencial de la ley —y en eso coincidimos todos—, de fragmentar el latifundio, se va a conseguir principalmente por la ejecución de esta ley. El doctor Repetto apuntó con mucha razón, y hay que insistir en ello, que no se busca con esta ley librarlos de manera provechosa para los propietarios, de muchos latifundios en quiebra. Sería éste el peor aspecto del problema. Que nadie busque en esta ley la liquidación de su propia mala situación; que no aparezcan los intermediarios, hasta ahora inevitables, que han malogrado muchas iniciativas de esta naturaleza. No se puede decir que no hayan existido leyes de colonización. En la provincia de Buenos Aires hubo una ley, la de los ejidos urbanos, que fracasó en gran parte precisamente por el ansia de especulación.

Así como el problema de la vivienda para el pueblo no se puede resolver por el capitalismo vulgar, de la misma manera la colonización no puede ser resuelta por iniciativa privada, por el capitalismo vulgar que sólo va en pos del lucro. Esto constituye un nuevo aspecto del problema.

Ello no obstante, sería injusto desconocer todo lo que la colonización argentina debe a la iniciativa privada. El hecho de que afirme

que ahora no conviene la iniciativa privada, no significa que le desconozca todo lo que ha hecho en el pasado. Alguna vez en este recinto se ha denunciado en forma espeluznante al explotador, por excelencia, del campo, al pulpero, al comerciante en ramos generales, que daba crédito al colono, le compraba su cosecha, le vendía artículos y máquinas, anotando en su libreta algunas cosas que no había comprado. Se ha denunciado eso como un crimen horrendo. Nadie niega ese aspecto del problema; pero, en aquel entonces, el señor diputado Repetto ha cantado una verdadera loa al antiguo pulpero de campaña, que fué el primer banquero, el primer vendedor de maquinarias, el primer habilitador del chacarero y que corría toda clase de riesgos, hasta en su propia vida. Es claro que ahora la existencia de una sucursal del Banco de la Nación, de una agencia de la gran casa de maquinarias, de una cooperativa, ha hecho que la acción del comerciante de campaña no tenga ya la importancia que antes tuvo, pero nadie puede negar la importancia decisiva que en sus comienzos tuvo para el fomento de la colonización particular.

Ahora las cosas han cambiado y la iniciativa privada es inconducente en este terreno. Las ganancias son mucho menores, la inteligencia de los hombres de la campaña se ha desarrollado, saben defenderse mejor, han cambiado las condiciones políticas, sociales y económicas del país, y todo ello hace que ese factor de colonización no tenga ya la importancia que antes tuvo.

Asimismo, se puede admitir que todavía la iniciativa privada puede desempeñar una gran función en la colonización. Grandes grupos humanos arrojados de sus países de origen por cuestiones políticas, religiosas o raciales, pueden ser colonizados mediante una acción filantrópica realizada por capitales privados que no persigan lucro.

De manera que no hay que condenar en absoluto la colonización privada. No hay que creer en la omnipotencia del Estado, en la virtud creadora de la ley. El Estado es el regulador, es el que encauza y dirige la iniciativa particular, pero su acción es muchas veces negativa y más ilusoria que real. Si los hombres no ponen en su acción corazón y cerebro, si no los guía un propósito social fundamental, el Estado y la ley no pueden ser omniscientes y omnipotentes.

No quiero extenderme más, porque en este debate lo sustancial, lo esencial lo han dicho al comienzo los miembros informantes de la

comisión que han estudiado a fondo el problema. He dicho que haría acotaciones al margen del debate y quiero referirme más que a su texto, al espíritu de la ley.

Al tratarse asuntos electorales un señor diputado se refería con frecuencia al espíritu de la ley. En materia electoral, evidentemente, lo que más importa es el texto de la ley; pero en materia social lo que más interesa es el espíritu de la ley. Conocen los señores diputados, y por redundancia lo repito, el inmortal libro de Montesquieu, predecesor de la Revolución Francesa, titulado precisamente *El espíritu de las leyes*. Cada ley tiene su espíritu y, más que ninguna, una ley de esta naturaleza.

El señor ministro de Agricultura tiene propósitos generosos y humanos. Así lo ha expresado en el discurso con que fundara este proyecto y en otras oportunidades. Hace poco, en un reportaje publicado en el diario «La Razón», afirmó categóricamente que la propiedad se justifica en razón de su servicio social; concepto muy importante, yo diría fundamental, que revoluciona las cabezas de los hombres antes de traducirse en los hechos.

La propiedad se justifica en razón de su servicio social: si ella no presta servicio social no debe existir. La propiedad no es un derecho inmanente; es un derecho creado por la ley y que la ley puede modificar.

El señor ministro y el Poder Ejecutivo pueden tener la mejor inspiración para el cumplimiento de la ley, pero sus mandatos son transitorios. Yo deseo al actual ministro permanezca en el cargo el período constitucional completo, pero, asimismo, su cargo es transitorio: dura sólo seis años. El Poder Ejecutivo actual tiene el firme propósito de aplicar la ley, pero las leyes no se sancionan para un Poder Ejecutivo sino para el porvenir. Entonces es indispensable insistir sobre el espíritu de la ley.

El espíritu de esta ley debe ser, en síntesis, lo que he manifestado en mi exposición: más que producir para el mercado internacional, producir para el mercado interno, aumentando considerablemente la población; que cada chacra más que una fábrica de trigo, maíz o lino, sea un almacigo de seres humanos, de muchos hijos sanos y robustos, de familias independientes y autónomas que produzcan para su propio consumo y para el intercambio, principalmente con las ciudades.

El principal propósito de esta ley debe ser

el aumento considerable de la población. Nuestra población está estancada porque el crecimiento vegetativo, en general, lento, en los últimos tiempos lo es mucho más. La desnatalidad o escasez de natalidad es un fenómeno sumamente complejo que es evidente que no se va a remediar con alguna caja que subsidie a familias numerosas, estímulo generoso que no puede tener influencia sobre el fenómeno demográfico de la desnatalidad. Tendrá, sí, influencia una ley de esta naturaleza si se la aplica con amor y con inteligencia. Si se da al hombre un pedazo de tierra y se le permite desarrollarse en ella con amplitud y libertad, si se le dan recursos de vida y de trabajo, la pareja que forme ha de engendrar una prole numerosa y sana. Así se va a producir el aumento de la natalidad. Principalmente países nuevos y des poblados como el nuestro no pueden darse el lujo de limitar la entrada de los hombres del mundo. Eso lo hizo Estados Unidos antes de la guerra porque tenía 120.000.000 de habitantes y podía establecer cuotas; pero no puede hacerlo, repito, nuestro país, que tiene 13.000.000 de habitantes y con vecinos que tienen 40 millones.

Nuestro problema esencial es demográfico: la demografía debe gobernar a la legislación y a la economía. Comprendo que pueda haber personas de criterio tan estrecho y egoísta que prefieran tener sus campos poblados de vacas y no de seres humanos. A eso se debe el fenómeno que hace pocos instantes el doctor Repetto me ha dicho figura mencionado en un libro: el nuestro es el país que tiene mayor cantidad de ganado en relación al número de habitantes, porque tiene diez vacas por cada ser humano; en Estados Unidos hay media vaca por cada ser humano y no se puede decir que Estados Unidos sea país menos poderoso y más pobre que el nuestro. Es posible que haya seres humanos de criterio tan antisocial que prefieran el latifundio casi desierto, de producción escasa, valuable en un 3 ó 4 %, a que los domine la preocupación de poblar con seres humanos el país. Pero ése no puede ser el criterio del gobierno ni del Parlamento. No lo es, a pesar de la nota discordante del señor diputado Infante, porque estoy seguro que tampoco tal es el sentir del señor diputado por Santa Fe.

La campaña argentina se poblará el día que el acceso a la tierra sea fácil, y no será fácil ni aun con esta ley. Lo será el día que se introduzca el doble régimen impositivo mencio-

nado por el señor diputado Repetto: el impuesto progresivo a la tierra y el impuesto al mayor valor.

Al señor diputado Aguirre Cámara, que tiene tan excelentes iniciativas en materia de impuesto a la renta —y que nosotros vamos a apoyar— le llamo la atención sobre el punto, porque considero que su cerebro es permeable para las ideas básicas y fundamentales: tanto más importante que el aumento del impuesto a la renta, es el impuesto progresivo a la tierra y al mayor valor. Se me dirá que ahora la tierra no vale mucho, pero ése no es argumento, porque mañana puede valer. Todavía la tierra argentina está a un precio muy inferior a tierras iguales de otros países; es muy posible que suba de precio. Entre nosotros es conocido el fenómeno de que basta una buena cosecha para que la gente se precipite a pagar por la tierra precios disparatados. Al hablar de buena cosecha me refiero, desde luego, a la cantidad y al precio.

La primera y fundamental preocupación debe ser la población, y poblaremos al país el día que el acceso a la tierra sea fácil, grato y placentero. Hay que cambiar la vida rural; y ha cambiado ya, como tuve oportunidad de verlo en una gira por Córdoba, donde observé que un chacarero posee su buen auto, sus hijas visten más o menos bien, usan sombrero y van al cine del pueblo. En vez de reprobar estos hechos, debemos contemplarlos con verdadera satisfacción. La campaña no puede ser poblada por trogloditas que viven en cuevas. Y así se va a cumplir, señor presidente, el célebre apotegma que ha merecido ayer una crítica; el apotegma de Arthur Young, que nunca fué ministro de Agricultura, que fué un simple viajero, que ha visitado países y estudiado sus condiciones técnicas, económicas, políticas y sociales: el apotegma que no traduce expresamente la realidad escueta, sino que es un símbolo: Dad a un hombre un pedazo de roca en propiedad y lo convertirá en jardín; dad a un hombre un jardín en arrendamiento y lo convertirá en roca. Esa es una expresión simbólica, que traduce una gran realidad.

Si esta ley sancionada, mejorada si es posible en el debate, fuera puesta en manos de hombres de corazón y de cerebro, que ven en el aumento de la población del país su progreso y su porvenir y no en su ganadería, que no desdén ni desprecio, ejecutada con amor y con visión del porvenir, se cumplirá lo que dijo el señor diputado Anastasi esta tarde: el propó-

sito revolucionario de la ley. Será una ley de revolución desde arriba, ya que nuestra campaña no tiene la densidad ni la capacidad de población, ni su carácter histórico y tradicional para realizar una revolución desde abajo y reivindicar el agro como propiedad de sus tarabaisabuelos. Démosla por ley y miremos hacia el futuro; el país cumplirá así su destino con los 50 ó 100.000.000 de habitantes que el gran Sarmiento ha soñado para el porvenir de la República.

Nada más. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Pita). — Le corresponde hacer uso de la palabra al señor diputado por la Capital, doctor Cantilo.

Sr. Cantilo. — He renunciado a hacer uso de la palabra. Ya lo había comunicado a Secretaría.

Sr. Presidente (Pita). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Maino. — El señor diputado que acaba de dejar el uso de la palabra ha aludido a una voz disidente del optimismo que reina alrededor de este proyecto, se refería al señor diputado por Santa Fe, doctor Infante. Lamento ser otra de las voces disidentes.

A mi juicio los problemas fundamentales en nuestro país son tres. Uno es de orden político, al que me refiero desflorando el tema al pasar, y que consiste en la devolución al soberano de sus derechos. El segundo es el de la mejora de nuestra balanza comercial. Incidir sobre esa balanza es poco menos que imposible, desde el momento y durante la época que haya países que prefieran los cañones a la manteca. Pero el tercer problema, más fundamental, es el de la distribución interna de la riqueza. Eso compete al Estado argentino y puede ser resuelto por el Congreso. El proyecto de ley que estamos considerando, en el fondo es nada más que un problema de distribución, y no me refiero a la tierra, sino a la riqueza producida por aquélla. ¿Qué persigue este proyecto y qué es lo que debería perseguir? ¿Cuál es el propósito de esta ley? Que el que trabaja la tierra la posea; que la tierra sea de quien la trabaja. El Estado expropiará tierras para venderlas. Pero, ¿qué debe hacer el Estado, es decir, el consejo agrario nacional para que los precios de compra sean tales que convengan a los futuros labradores? Deprimir los precios. El Estado se va a lanzar a una enorme adquisición de tierras y fatalmente, por esa operación, y, puede decirse que ya ahora, por la simple consideración del proyecto— los precios de la tierra en la República Argentina se están elevando,

y entonces el Estado va a tener que adquirir las tierras a un precio de alza ficticia.

Si los precios en virtud de la ley que se está considerando se han elevado, corresponde meditar acerca de los medios de deprimirlos. Al Estado conviene la depresión de los precios. ¿De qué modo? Este punto fundamental no está contemplado en el despacho. El plan de esta ley dará precarios resultados si no se habilita previamente, para el pago de una cuota que los inicie en el carácter de flamantes propietarios, a un porcentaje apreciable de arrendatarios y colonos y la única manera de obtenerlo es limitando el precio de los arrendamientos.

Se ha desflorado apenas por algunos de los señores diputados que han opinado sobre este asunto el tema del precio del arrendamiento, del impuesto al mayor valor, no llegándose al fondo del problema, y que, según las palabras del señor ministro, a quien después aludiré, es previo a la compra que establece esta ley.

Hay que fijar un límite al precio del arrendamiento. Por este proyecto se pretende instituir a una enorme masa de 400.000 arrendatarios en propietarios de la parcela que cultivan. ¿Cómo puede suponerse que haya 400.000 arrendatarios que tengan el pequeño capital, por pequeño que sea, necesario para iniciar la aplicación de esta ley? Podría decir que los arrendatarios que podrían ser propietarios, ya lo son; pero esa enorme masa de arrendatarios carece de lo más indispensable, mucho más en estos momentos en que los precios de los productos agrícolas son los que todos los señores diputados conocen.

Este proyecto no pasará de ser un excelente propósito. Llegado el momento de la práctica, no se conseguirá resultado alguno. Los cien millones de pesos que, en definitiva, se proyecta destinar al cumplimiento de esta ley, a penas alcanzarán para erigir en propietarios a unos 10.000 arrendatarios. Calculo este número sobre la base de 30 ó 40 hectáreas para cada uno de ellos, a razón de \$ 300 cada hectárea.

Pero nada significa favorecer a 10.000 arrendatarios, que no representan un porcentaje apreciable como para motivar la sanción de una ley tan importante y permanente como ésta, frente a 400.000 arrendatarios, número que de año en año va creciendo.

Antes que instituir al futuro propietario, fin que persigue esta ley, habría que instituir al arrendatario que tenga los suficientes medios en el bolsillo para poder acogerse a los beneficios que ella brinda. ¿Cómo lograr que el cha-

carero o el cultivador de la tierra pueda realizar algunas economías, a fin de acogerse a la ley? El proyecto no lo ha contemplado.

Más adelante intentaré y he de proponer las medidas que, a mi juicio, conducen a ello.

Se pretende con amplio espíritu y gran visión, erigir al peón de campo —porque el arrendatario no es sino un verdadero peón— en clase media. Y a eso se debe tender: a la formación de más vastas clases medias.

La desaparición de las clases medias en Grecia y Roma, no sólo fué causa principal de la decadencia política, sino de la decadencia económica, afirman Thierry y Perrès.

«Todo lo que es inteligencia, energía, sentimiento, libertad, ha procedido casi siempre de las clases medias, y donde han desaparecido las clases medias, han desaparecido también las iniciativas o no se han formado las grandes aptitudes, dice Nitti.

—Ocupa la Presidencia, el señor presidente de la Honorable Cámara, don Juan G. Kaiser.

«Hace varios siglos, agrega, que en Europa el sector que piensa y que dirige, procede casi únicamente de las clases medias. Es imposible una democracia sólida y duradera donde se encuentren frente a frente un pequeño número de ricos o de nobles y una multitud de pobres.

«La fuerza de todas las sociedades libres está determinada por el desarrollo y la extensión de las clases medias. En todas partes y en todo tiempo las grandes desigualdades de la riqueza y la desaparición de las clases medias han sido causas de catástrofes.

«La clase media es la que asegura la estabilidad y la duración de las democracias. Por ello el legislador debe en lo posible asegurar el desarrollo de los estamentos medios.

«Si nunca ha existido una verdadera república, se debe a que el legislador no ha comprendido la necesidad de desarrollar las clases medias.»

Un escritor contemporáneo, don Salvador de Madariaga, en una obra relativamente reciente, *Anarquía o jerarquía*, dice: «Casi toda la civilización occidental se debe a las clases medias. Civilización quiere decir casi exclusivamente vida de las clases medias occidentales; y las artes, las ciencias, las amenidades del occidente, son casi todas creaciones de hombres de la clase media. Shakespeare, Cervan-

tes. Göethe, Dante, Kant, Spinoza, Montesquieu, Galileo, Rembrandt y cientos más, son hijos de la burguesía.

«Las clases directoras y poseyentes que no se dan cuenta de la necesidad de desprenderse de sus privilegios de clase y propiedad no justificados por un criterio funcional, están destinadas a desaparecer», ha dicho también Madariaga.

Y Nitti dice: «La democracia no se produce sin una acción de las clases medias. Las democracias estables se hallan no sólo donde el mayor número de ciudadanos posee la mayor parte de las ganancias, sino la mayor parte de las riquezas».

Este proyecto va en busca de esa finalidad: desarrollar los estamentos medios de nuestra sociedad; dar más vastedad a nuestras clases medias, haciendo que los arrendatarios salgan de su condición de tales, para llegar a ser propietarios.

En esas clases medias se funda la paz social. Donde hay muy desarrolladas las clases medias, no hay casi conmociones de carácter social: ellas se oponen siempre a los extremismos de derecha o de izquierda.

Pero este proyecto, no obstante la erudición y la elocuencia de los discursos que se han pronunciado, no han logrado convencerme de que no haya fallas fundamentales en ese proyecto.

Hay que crear el que tenga las economías necesarias para iniciarse en los beneficios de la ley. Es reducidísimo el porcentaje de arrendatarios con dinero suficiente para incorporarse a las instituciones de este proyecto. Y, ¿qué hay que hacer, entonces, para abordar ese problema que es fundamental para el éxito de la ley? Para decirlo con más claridad: ¿cómo hemos de poner en el bolsillo del arrendatario el dinero que necesita para poder acogerse a este proyecto?

A mi juicio, la solución se encuentra en la fijación del precio del arrendamiento; y hace algunos días he tenido el honor de presentar un proyecto al respecto.

La Unión Cívica Radical, a la que me honro en pertenecer, tiene en su plataforma los puntos que ha señalado en su espléndido discurso el señor diputado Anastasi. Pero la plataforma radical no es un amontonamiento de conceptos inorgánicos e inarmónicos: es un cuadro lógico y perfectamente armónico. Y si bien contiene los preceptos que ha enunciado el señor diputado Anastasi sobre creación de un consejo nacional agrario y sobre normas para evitar los latifundios; para llenar esas finalidades

tiene otros preceptos que podría contemplar el proyecto que consideramos, entre ellos, la fijación del interés legal. Ahora bien, ¿qué es la renta del suelo, qué es el precio del arrendamiento, sino el interés del capital invertido en el suelo? De modo tal que es para cumplir uno de los puntos de la plataforma de mi partido que intervengo en este debate —aunque sólo sea en la forma deficiente en que puedo hacerlo—, para que demos una finalidad práctica a este proyecto.

Si no se fija el precio del arrendamiento para que en algunos años pueda el arrendatario economizar la suma necesaria para acogerse a esta ley, ella no podrá tener amplios principios de ejecución.

Se va a producir con esta ley otro fenómeno: con su sanción vamos a lanzar al mercado inmobiliario a un comprador gigante, el Estado, el consejo agrario nacional. Lo primero que va a ocurrir es el alza del precio de la tierra; haremos que estos arrendatarios a quienes se quiere instituir en propietarios, tengan que pagar por la tierra más de lo que vale ahora.

Ese es un fenómeno económico que se va a producir inexorable y fatalmente. ¿Cómo corregirlo? El proyecto no lo ha previsto. Estoy convencido de que la única manera de evitar esa alza ficticia del valor de la tierra es la sanción del impuesto al mayor valor, que se ha mencionado superficialmente en el debate. Se me ha de decir que el impuesto al mayor valor fundado sobre el impuesto inmobiliario —que se llama contribución territorial en el orden nacional, impuesto inmobiliario y otras designaciones análogas en las provincias—, es de competencia de las provincias. Pero no lo creo así, en forma absoluta. Puede ser de competencia de la Nación en virtud de la sanción previa de esta ley, que puede ser sancionada por el Congreso nacional, entregando el producido de ese impuesto al mayor valor, a las provincias respectivas.

He de entregar a Secretaría, después de esta breve exposición, el proyecto que espero quiera considerar la comisión que ha hecho este despacho. En un proyecto que presenté el año pasado, proyecto de carácter orgánico que no ha tenido hasta ahora la suerte de ser leído por muchos señores diputados y sobretudo por los de la Comisión de Presupuesto, preveía estas conclusiones a que he llegado frente al proyecto de ley que se considera. En él se establece la escala progresiva para la mayor parte de los

impuestos susceptibles de progresividad, en oposición a la proporcionalidad habitual. Establecía el impuesto progresivo para la contribución territorial y creaba el impuesto al mayor valor. Y véase, señor presidente, cómo voy a tener la satisfacción de coincidir con el señor ministro. El señor ministro, en la concentración de agricultores de Bell Ville, realizada el año pasado, expresó lo siguiente: «Con la ley de arrendamientos rurales y de crédito agrario se contempla en parte el problema, y con la ley de colonización que el Congreso discutirá en las primeras sesiones del próximo período, se lo complementa». Vale decir, que el señor ministro ha expresado que la ley de colonización es complementaria de la otra, la que se refiere al precio de arrendamiento. Sostengo, pues, que previamente a la sanción de esta ley, si no se prefiere incluir en ella la disposición pertinente, correspondería fijar el precio del arrendamiento para que la ley que se pretende sancionar tenga eficacia práctica, porque nos vamos a encontrar con los 400.000 chacareros sin dinero para efectuar el primer aporte que la ley les exigirá.

Hace más de cuarenta años que estoy viendo pasar ante mis ojos a los hombres que trabajan el campo. Por alguno que otro resqueicio de la buena suerte, por los buenos precios o buenas cosechas, he visto filtrarse hacia el carácter de propietario a alguno que otro arrendatario. La mayor parte, a muchos de los cuales todavía sigo viendo, han laborado la tierra como arrendatarios; muchos siguen sudando sobre ella, sufriendo necesidades ellos y sus hijos.

La despoblación del campo, la hipertrofia de la Capital, se debe precisamente a esta circunstancia.

El campo no da lo suficiente para vivir en relación a los sacrificios que demanda. El chacarero tiene innumerables enemigos, desde la hormiga, la sequía, la helada, la langosta, hasta el fisco, que hoy acentúa más su influencia con el impuesto a la renta, que también alcanza a muchos pobres agricultores. Además de todo eso, tienen, en primer término al propio Estado como enemigo.

Tengo aquí algunos contratos — y creo que ninguno de los señores diputados ha de desconocer otros parecidos — en que se llegan a establecer porcentajes enormes como precio del arrendamiento, superando en algunos casos el 40 % del producido, lo que agregado al valor de la semilla, que hay que pagar aparte, se llega a un 50 % del valor de la cosecha, que el feliz propietario percibe sin haber trabajado. Esos agricultores arrendatarios se encuentran

en la misma condición en que se hallaban hace más de 2.500 años los ilotas: el propietario de la tierra se llevaba el 50 % de su producido.

Los labradores —y tengo aquí el contrato de algunos de ellos— deben abandonar la tierra por las excesivas exigencias de los propietarios.

Hay que contener al propietario en esa usura, estableciendo un precio máximo para el arrendamiento de la tierra, a fin de que esta llene finalidades sociales. Es necesario condonar las demasías del instinto de conservación que se traduce primero en un instinto de propiedad —por lo cual los radicales patrocinamos la propiedad privada— y que más adelante, excediéndose, ese instinto se convierte en usura.

Hay que hacer servir a finalidades sociales el espíritu de lucro excesivo de muchos propietarios. Es una aspiración la fijación del precio de los arrendamientos para todos los agricultores. Estos, que son los que habrán de pagar los precios excesivos, aspiran a ser, no redimidos de lo que legítimamente les corresponde pagar, sino redimidos del exceso de lucro que los mantiene siempre en la miseria: apenas viven comiendo para trabajar; se les deja a ellos, como a los asalariados, apenas lo suficiente para que no mueran. Pero nunca en la medida suficiente para que sean los sujetos de esta ley.

Tengo aquí los recortes de los diarios donde se publicaron las noticias relativas a las sanciones de los congresos rurales celebrados el año pasado y de ellas surgen que unánimemente todos los arrendatarios claman por que el Congreso fije el precio del arrendamiento. Y el señor ministro también lo ha sostenido así.

Me complace en felicitar al señor ministro por su opinión, que he de citar más adelante, porque considero que el ciudadano, el funcionario, el hombre que emite esos conceptos, es porque los tiene profundamente arraigados y que con seguridad no ha de abandonarlos sino que, llegado el momento, ha de saber instar a los legisladores, que no tengan suficientemente clara la visión de este problema, para que den su voto en favor de esa reforma. Se refirió el señor ministro a la necesidad de fijar límites a la tasa del arrendamiento y a las obligaciones muchas veces arbitrarias que se imponen al arrendatario.

Es impostergable, y urgente, ahora, la fijación del precio del arrendamiento, pues de lo contrario esta ley será anodina. Y si no se sanciona el

impuesto al mayor valor, la ley será, no sólo anodina, sino también nociva, porque va a crear artificialmente un aumento del precio de la tierra y el Estado se verá en la necesidad de pagarla a un precio que no es el real, sino el producto de la especulación.

Algún señor diputado y el propio señor ministro se han referido al precio de costo. El costo lo forman no solamente el trabajo, la semilla, la limpieza del suelo, el transporte de la cosecha y la ganancia del comprador; en los costos también influye el precio del arrendamiento. El arrendamiento tiene una importancia fundamental en la solución del problema, pues los costos no podrán ser disminuídos suficientemente si no se llega a atacar ese aspecto.

Y hay más: existen impuestos provinciales que inciden directamente —aunque no lo piensen así sus creadores— sobre el costo. En la provincia de Buenos Aires existe un impuesto de 10 centavos por quintal de lino, de 4 centavos por quintal de maíz y de 6 centavos por quintal de trigo. Todo eso debe computarse en

el renglón costos, y debe ser contemplado por la ley.

Sr. Repetto. — En Santa Fe debe haber algo parecido.

Sr. Maino. — Cualquiera que sea la provincia donde existan esos impuestos, lo cierto es que ellos inciden sobre el producido de la tierra y deben ser suprimidos. Y tanto lo saben así esas provincias, que han buscado ante la Suprema Corte Nacional eludir la sanción respectiva.

—Suenan la campanilla que indica la expiración del término reglamentario concedido al orador.

Sr. Maino. — Solicito una breve ampliación del término.

Sr. Presidente (Kaiser). — La Cámara debe pronunciarse, pero como no hay número para votar, queda levantada la sesión.

—Era la hora 20 y 14.